



Programa:

**Mujeres Nicaragüenses fortalecidas
para el ejercicio de su ciudadanía**

**Aplicación del enfoque de género en las políticas
públicas desagregadas por etnia y edad
Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y
Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS)**



Informe de hallazgos



Abril 2014

—— Credits ——

Coordinacion

Dorotea Wilson Thatum

Diseño y Diagramacion

Joel Benjamín Zamora

Voces caribeñas

Managua Nicaragua

Bello horizonte, de la rotonda 3 c al sur, 1 c abajo, 1/2 al sur Casa No. H II 6.

Tel: 505-22442223

email: vocescaribenas@yahoo.es

web: www.mujeresafro.org

Bilwi, Puerto Cabezas

Barrio aeropuerto de la gasolinera manati 1 c al sur

Tel: 505-27921744

vocescaribenas@turbonet.com.ni

Buscanos en Facebook Voces Caribeñas Bilwi

Índice de contenidos

Introducción

Primera parte

Costa Caribe de Nicaragua y contexto

I.	Demografía	01
II.	Condiciones socioeconómicas	03
III.	Principales desigualdades estructurales y de género en la Costa Caribe de Nicaragua	04
1.	Antecedentes	04
2.	Inserción económica	05
3.	Brechas en el acceso y control de los recursos productivos	08
4.	Salud	10
5.	Educación	11
6.	Salud sexual y reproductiva	12
7.	Migración	14
8.	Participación política	15
a.	Asamblea Nacional	15
b.	Alcaldías municipales	17
c.	Consejos regionales	17
9.	Medios de comunicación	20
V.	Seguridad ciudadana	20
IV.	Violencia de género	23

Segunda parte

Políticas públicas en Nicaragua y la Costa Caribe

I.	Marco conceptual	27
II.	Normas jurídicas que contribuyen a la equidad de género en el país	27
III.	Institucionalidad pública que favorece la equidad de género	28
IV.	Instrumentos y servicios a favor de la equidad de género en el país	30
V.	Efectos tangibles de las políticas de género	31
VI.	Normas jurídicas que contribuyen a enfrentar la exclusión y discriminación por asuntos de género e identidad étnica en la Costa Caribe	33
VII.	Instrumentos jurídicos que favorecen los derechos de pueblos indígenas, comunidades afro descendientes, jóvenes, adolescentes y mujeres	35
VIII.	Avances en la equidad de género y la inclusión de mujeres en cargos públicos y de decisión en la Costa Caribe	39
IX.	Conclusiones	43
X.	Recomendaciones	45

Introducción

El Programa Mujeres Nicaragüenses fortalecidas en el ejercicio de su ciudadanía es una iniciativa que se implementa desde el mes de abril del año 2012, bajo el consorcio Voces Caribeñas y la Universidad de las Regiones Autónomas del Caribe de Nicaragua (URACCAN), con apoyo del Gobierno Vasco a través de Intermon Oxfam. Como parte de las actividades del Programa se ha querido conocer la situación relativa a la aplicación de políticas públicas de equidad de género, en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (RAAN – RAAS). El propósito es verificar si las instituciones del gobierno, garantes de estas políticas, han definido o no estas políticas y si las mismas se aplican de manera desagregada por sexo e identidad étnica.



El estudio se basa en recopilar información bibliográfica existente sobre el tema recurriendo a diversas fuentes secundarias tales como diagnósticos, estudios sobre diversos temas, revisión de encuestas nacionales tales como CENAGRO 2011, ENDESA 2006 - 2007, Encuesta Nivel de Vida 2009, Censo Urbano para RAAN y RAAS, INIDE 2010, informes de diversas instituciones del gobierno (Consejo Supremo Electoral, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación) así como de otros poderes del Estado (Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia). Este esfuerzo se ha complementado con acceso a fuentes primarias de información especialmente funcionarios de ambos gobiernos regionales, funcionarios de alcaldías municipales y representantes del partido de gobierno. Si bien se logró acceso a información primaria con actores relevantes, la información que se obtuvo no es completa ni abarca todos los municipios de ambas regiones autónomas. Desde este enfoque, los datos que se muestran en este documento son una muestra de los principales acontecimientos vinculados a la aplicación de las políticas públicas en la Costa Caribe.

El documento está estructurado en dos partes: (i) la primera de ellas muestra una descripción de las principales características demográficas, sociales y económicas de la Costa Caribe de Nicaragua así como una descripción de las principales inequidades estructurales y de género que afectan a la población de la Costa Caribe particularmente, a las mujeres.

(ii) La segunda parte describe cuáles son las políticas públicas nacionales que contribuyen a la equidad de género, las que manifiestan en leyes, normativas e instrumentos diversos utilizados por el gobierno central. A la vez, se muestra el marco legal que contribuye a enfrentar las condiciones de discriminación y exclusión de género, que vive la población de la Costa Caribe. Esta parte contiene conclusiones generales y recomendaciones que se hacen a las autoridades nacionales y regionales.

De manera especial en estudio aborda temas específicos tales como la revisión de ordenanzas regionales y municipales con el fin de verificar si las mismas contribuyen a la equidad de género. Así mismo se presenta la situación de inclusión de las mujeres en cargos de elección popular en tres niveles: diputados, consejos regionales y alcaldías municipales. Finalmente, se muestran datos sobre la participación de mujeres en puestos de dirección en instituciones de gobierno.

Este esfuerzo contribuye a poner en perspectiva los avances que se experimentan a nivel nacional y en la Costa Caribe por la equidad de género y la necesidad que existe que estas políticas se desagreguen, por identidad étnica y edades, a fin de superar los factores que propician inequidad y exclusión, particularmente de las mujeres.



Primera parte

Costa Caribe de Nicaragua y contexto

I. Demografía

El 8.2% de la población del país es indígena y afro descendiente que se concentran en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe (RAAN y RAAS). En ambas se encuentra una población aproximada de 626,848 habitantes de origen multiétnico y pluricultural. La RAAN y la RAAS abarcan 43.42% del territorio nacional y 11.43% de la población nacional. La Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) se encuentra ubicada en el sector noreste del país. Posee una superficie de 32,819.68 km² integrada por 8 municipios (Waspám, Puerto Cabezas, Prinzapolka, Rosita, Bonanza, Siuna, Mulukukú y Waslala). La sede del gobierno regional se encuentra en la Ciudad de Bilwi (Puerto Cabezas). La población regional asciende a 394,792 habitantes y representa el 7% del total de la población del país; de este total de población, el 57% se identifica como mestizo, un 36% como miskito, un 1% como creole o negro y un 6% como mayangna¹. La densidad poblacional es de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. El 33.3% de la población vive en zonas urbanas y el 66.7% en el área rural.



La Región Autónoma del Atlántico del Sur (RAAS) posee una superficie de 27,260 km² integrada por 12 municipios (Nueva Guinea, El Rama, Bluefields, Bocana de Paiwas, Muelle de Los Bueyes, La Cruz del Río Grande de Matagalpa, El Tortuguero, El Ayote, Kukra Hill, Laguna de Perlas, Corn Island y Desembocadura del Río Grande de Matagalpa). La sede del gobierno regional se ubica en la Ciudad de Bluefields. La población regional asciende a 306,510 (2005); un 60% de esta población se autoidentifica como mestizos, un 22.5% como creoles o negros, un 10% como miskitos, un 2% como Rama, un 0.1% como Ulwa y el resto no se identificó con ningún grupo étnico. El 36.9% de la población de la RAAS vive en zonas urbanas y el 60.4% vive en zonas rurales de la región.

Gráfico No 1. Población por municipio y por grupo étnico en Porcentajes

Municipio	Población	Extensión Km2	Densidad hab/Km2	Mestizos %	Miskitus %	Creoles %	Mayangna %	Rama %	Garífuna %
Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN)									
Puerto Cabezas	82,548	5,985	13.8	22%	72.3%	6%	0,3%		
Waspam	55,586	9,342	6.3	4%	91%		5%		
Prinzapolka	24,784	7,020	3.3	20%	79%	1%	0.3%		
Bonanza	83,115	1,898	7.2	47%	8%	0.2%	45%		
Rosita	28,324	2,205	12.8	72%	11%	0.4%	17%		
Siuna	22,913	5,040	43.8	98%	0.6%	0.1%	0.6%		
Mulukukú	37,815	1,618	23.4	100%					
Waslala	59,707	1,329	44.9	100%					
Total	394,792	32,127	9.4	57%	36%	1.15%	6%		

Fuente: VIII Censo de Población y IV de Viviendas, 2005 / Adaptado INIDE 2009

1. VIII Censo de Población y IV de Viviendas, 2005 / Adaptado INIDE 2009

Municipio	Población	Extensión Km2	Densidad hab/Km2	Mestizos %	Miskitus %	Creoles %	Mayangna %	Rama %	Garífuna %
Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN)									
Corn Island	12,520	13.1	920	30%	40%	27%			3%
Bluefields	49,292	4,775	10	57%	6%	34%		3%	0.5%
Pear Lagoon	10,628	3,876	2.74	7%	38%	27%			28%
Kukra Hill	13,200	1,193	11	80%	10%	10%			
Desembocadura del Río Grande	5,500	1,738	3.2	15%	50%	15%	20%		
La Cruz del Río Grande	20,000	3,448	5.8	99%	1%				
El Tortuguero	33,844	3,403	9.9	99%	1%				
Bocana de Paiwas	55,000	2,375	23	100%					
El Ayote	15,196	831	18.3	100%					
Muelle de los Bueyes	29,590	1,391	21	100%					
El Rama	63,245	3,753	16.8	100%					
Nueva Guinea	128,00	2,774	46.14	100%					
Total	429,552	27,546	15.6	90%	3%	6%	0.26%	0.3%	0.8%

Fuente: VIII Censo de Población y IV de Viviendas, 2005 / Adaptado INIDE 2009

A nivel de ambas regiones autónomas la demografía regional adquiere la siguiente situación:

Gráfico No. 2 Demografía ambas regiones autónomas

RAAN – RAAS	Población	Extensión Km2	Densidad hab/Km2	Mestizos %	Miskitus %	Creoles %	Mayangna %	Rama %	Garífuna %
Total	737,990	60,366	12.23	76%	17%	4%	3%	0.17%	0.5%

Fuente: VIII Censo de Población y IV de Viviendas, 2005 / Adaptado INIDE 2009

Gráfico No 3. Indicadores demográficos Costa Caribe

Indicadores	RAAN	RAAS	País
Población rural	72%	63%	44%
Población menor 15 años	47.6%	44.8%	37.3%
PET hombres	49%	51%	57%
PET mujeres	50%	53%	59%
Razón de dependencia	101	92	71
Índice de feminidad	98.6	98.7	102.8
Jefatura hogar femenina	21.6%	25.4%	30.3%
Esperanza de vida al nacer – mujeres	68.2 años		72.9 años
Esperanza de vida al nacer - hombres	63.6 años		68.1 años

Fuente: Diagnóstico de género Costa Caribe de Nicaragua / Banco Mundial – Banco Interamericano de Desarrollo / 2009

La información anterior muestra que en RAAN y RAAS se ubican entre los territorios con mayor peso porcentual de población rural del país (72% y 63% respectivamente). La mayor ruralidad de la RAAN puede explicar por qué las brechas con respecto al país son por lo general mayores que en la RAAS. Así mismo, el mayor peso relativo de población joven y el menor de la población en edad de trabajar dan lugar a una relación de dependencia significativamente más elevada que la nacional (101 en la RAAN y 92 en la RAAS versus 71 del promedio nacional).

La esperanza de vida al nacer (EVN) en la Costa Caribe es casi cinco años menor que para la población del país, tanto para hombres como para mujeres, lo cual refleja unas condiciones de vida que sitúan a estas regiones en un nivel de desarrollo humano inferior al de Nicaragua en su conjunto. La mayor esperanza de vida de las mujeres en la Costa Caribe no se traduce en una mayor calidad de la misma. Los múltiples partos, las infecciones de transmisión sexual, los problemas crónicos y degenerativos, y los tumores disminuyen sus años de vida saludable (PNUD, 2005).

Por otra parte, el peso relativo de la jefatura de hogar femenina (21,6% en la RAAN y 25,4% en la RAAS, según datos del censo de 2005) es actualmente mayor que en 1993, pero sigue siendo menor que el promedio nacional (30,3%). Sin embargo, existen diferencias significativas entre los municipios. Por ejemplo, en el municipio de Rosita (donde predomina la población mestiza), este indicador asciende a un 37%; en Corn Island y Bluefields se eleva aún más: 46% y 50% respectivamente. Son los municipios con predominio de población rural los que presentan los menores niveles de jefatura femenina. De acuerdo con las características étnicas, los hogares encabezados por mujeres tienen mayor peso entre los kriols (35,3%) y los ramas (50%) (Cunningham, 1994; Molina, 1999; Pérez, 2002). Es también notorio que entre los kriols se da la mayor proporción de familias extensas (61,4%) y con mayor número de miembros del hogar (6,5 versus 5,5 como promedio en la RAAS, región en la cual se concentra esta población).

II. Condiciones socioeconómicas

En la Costa Caribe se encuentran las mayores brechas de pobreza a pesar de tener el mayor potencial en recursos naturales del país y aportar la mayor parte de la biodiversidad y riqueza cultural a la sociedad y Estado nicaragüenses. 12 de los 25 municipios más pobres de Nicaragua se encuentran en la RAAN y RAAS; 28.2 % de la población urbana de la Costa Caribe vive con menos de 1 dólar al día mientras que el 67.7% de la población rural vive debajo de esa línea de pobreza extrema (EMNV, INIDE 2005). Un factor adicional que agrava la situación de marginalidad de la región es la limitada infraestructura en vial, comunicaciones, energética y servicios en educación y salud. De acuerdo al mapa de pobreza formulado en base a necesidades básicas insatisfechas, la RAAN y la RAAS están entre las cuatro Regiones/departamentos con mayor incidencia de pobreza extrema expresada en porcentajes de extrema pobreza que corresponden al 70.9% y 63.1% respectivamente (Censo 2005).

En 2005, la RAAN registró una tasa de mortalidad materna 2.1 veces más alta que el promedio nacional y una tasa de mortalidad perinatal 1.6 veces más alta. La desnutrición crónica afectaba a 33.7% de los niños miskitos; padecían desnutrición global 12.8% de los miskitos (8.9% el país).

Las comunidades miskitas sólo consumen el equivalente a 70% del consumo alimentario per cápita promedio del país y 49% no cubren la canasta básica (34% en el país).

El cúmulo de condiciones descritas anteriormente, tienen un mayor impacto en la población indígena de la Costa Caribe tal y como se muestra en el gráfico siguiente:

Gráfico No 4. Comparación² de Índice de Indicadores de vida y salud

Indicador	Pueblos indígenas RAAN – RAAS	Población nacional
Agua en red pública	18.6	63.1
Disponibilidad de servicios higiénicos	15.7	26.2
Disponibilidad de luz eléctrica	54.7	72.6
Tenencia de radio	56.6	81
Tenencia de televisión	31.2	59.4
Tasa de analfabetismo	25	22
Primaria aprobada (13 – 17 años)	37.5	59.4
Secundaria aprobada (18 – 24 años)	18.9	33.4
TM – de 5 años	73.4	59.4

Fuente: Informe PNUD Más allá de la escasez, poder, pobreza y crisis mundial del agua, Nicaragua 2006

III. Principales desigualdades estructurales y de género en la Costa Caribe de Nicaragua

1. Antecedentes

La Constitución Política de la República de Nicaragua, establece la igualdad de todos los nicaragüenses ante la ley, sin “discriminación por motivos de nacimientos, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social (Cn. Arto 27).” Además, afirma “la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos”; aclarando categóricamente que “existe igualdad absoluta entre el hombre y la mujer (Cn. Arto 48)”. Es claro, que el simple enunciado de igualdad, no ha resuelto la condición de inequidad de género existente en el país.

La responsabilidad del Estado en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres se ha manifestado muy tímidamente. Aunque progresivamente se ha ido incorporando el enfoque de género en una parte del quehacer institucional, la gestión pública carece de instrumentos legales y normas, que puedan asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en la construcción de una sociedad con equidad de género. Esta situación es mucho más evidente en la Costa Caribe de Nicaragua donde persisten y se alimentan desigualdades de género, que tienen su origen en causas estructurales de vieja data y otras más recientes. En este acápite se muestran las principales desigualdades que afectan especialmente a las mujeres de la Costa Caribe.

2. Es muy probable que algunos de estos indicadores hayan variado desde el 2006; sin embargo se muestran a manera de comparación de las diferencias que existen entre la población indígena y no indígena en relación a calidad de vida.

2. Inserción económica

El panorama general de la inserción económica femenina y de las desigualdades de género en la Costa Caribe está caracterizado por los siguientes indicadores:

- I. La tasa de inactividad económica de las mujeres rurales en esta macro - región es 4,6 veces la de los hombres (17,1% y 78,2% respectivamente). La tasa de inactividad masculina en zonas urbanas es mayor que en las zonas rurales (34,7%), pero es mucho más baja que la de las mujeres urbanas (60,8%).
- II. Entre las desigualdades de género detectadas en la inserción económica de la población rural resalta la relacionada con el nivel de actividad productiva. La tasa neta de actividad económica de las mujeres rurales es sólo de un 25%. Las brechas urbano-rurales se dan para ambos sexos, pero son significativamente mayores entre las mujeres.

Gráfico No 5. Tasas netas de actividad económica

Ambito territorial	Hombres	Mujeres	Total
Nacional	75	35	54.6
Urbano	68.5	44.4	55.6
Rural	80.6	25.2	53.7
Costa Caribe	75.8	29.6	52.4
Urbano	65.3	39.2	51.5
Rural	82.9	21.8	53.1

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC. 2005

Como resultado de las diferencias en los niveles de actividad de cada sexo, la población económicamente activa (PEA) es mayoritariamente masculina, especialmente en las áreas rurales.

Gráfico No 6. PEA masculina sobre la PEA total

Ambito territorial	Rural	Urbano	Total
Nacional	77.3%	57.1%	67.3%
Costa Caribe	80%	59.6%	71.4%

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC. 2005

- III. A pesar de que el grueso de la actividad económica rural se concentra en el sector agropecuario (73% del empleo rural total), la distribución de mujeres y hombres rurales entre las diferentes ramas varía sustancialmente. Los hombres se concentran principalmente en las actividades agropecuarias. Aunque allí también se ubica la tercera parte de las mujeres económicamente activas, más de la mitad se reparte entre dos ramas terciarias: servicios comunales, sociales y personales, y comercio, hoteles y restaurantes. Una excepción relativa es la de las mujeres rurales de la Costa Caribe, donde más de la mitad (54%) se desempeña en actividades agropecuarias. La inserción de las mujeres rurales en actividades no agropecuarias es una situación a la que las políticas económicas y los programas públicos vigentes no han respondido todavía.

Gráfico No 7. Distribución porcentual de población ocupada por ramas principales de actividad

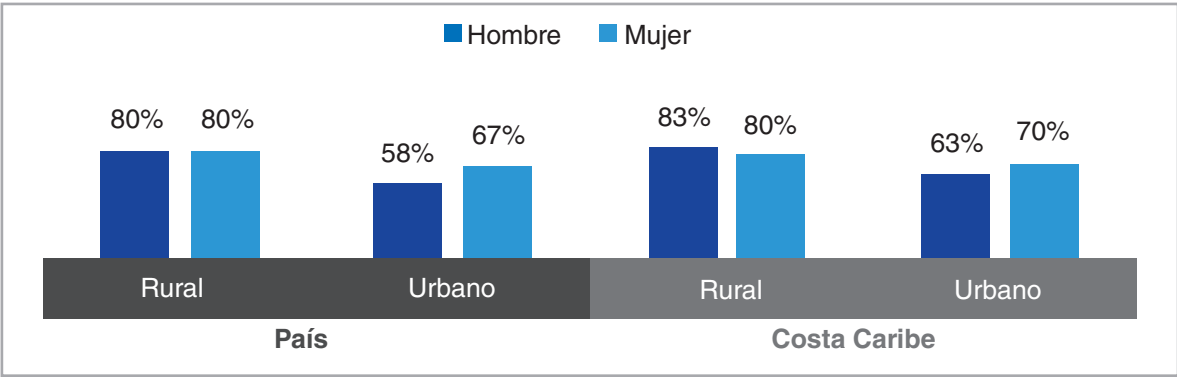
Ramas de actividad económica	País				Costa Caribe	
	Rural		Urbano		Rural	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Act. Agropecuarias	84	33.8	19.5	2.4	85.6	54.1
Servicio, com, soc, pers	3.6	26.4	17.3	39.8	3.2	1.5
Comercio, hoteles, restaurantes	3.9	23.3	22.8	37.9	2.5	22.8
Industria manufacturera	3.1	13.7	15.2	17	1.4	6.3
Otras	5.4	0,8	25.2	2.9	7.3	0.3

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC. 2005

IV. Las estadísticas indican que la desocupación en el ámbito nacional es baja en las áreas rurales (1,1%). siendo mayor entre las mujeres (1,9%) que entre los hombres (0,8%). Los datos que se presentan a continuación indican que el problema principal tiene que ver con la calidad del empleo. Un primer elemento que surge del análisis de las cifras es el alto nivel de informalidad de la economía rural. El 79,4% de los hombres y 78,9% de las mujeres rurales se desempeñan en este sector, una proporción muy superior a la de quienes residen en las áreas urbanas (58,2% de los hombres y 66,9% de las mujeres urbanas se ubican en este sector).

En la Costa Caribe el nivel de informalidad se eleva aún más, tanto en las zonas rurales (84% de los hombres y 80,8% de las mujeres) como en la urbana (65,2% de los hombres y 69,3% de las mujeres). En las áreas rurales, las brechas de género no son significativas. Sin embargo, este dato global oculta diferencias importantes entre las ramas de actividad económica.

Gráfico No 8. Porcentaje de población ocupada en el sector informal por sexo



Fuente: Elaboración propia con datos de INEC. 2005

V. La ocupación rural tiene un componente importante de subempleo que, en el caso de las mujeres rurales ocupadas, supera el 51% en nivel nacional. El problema afecta más a las mujeres que a los hombres y más a la ocupación rural que a la urbana. El subempleo invisible presenta mayor peso porcentual que el subempleo visible. Sin embargo, en términos relativos, las brechas de género son más amplias en el caso del subempleo visible: el porcentaje de mujeres rurales ocupadas supera en más de tres veces el porcentaje de hombres ocupados en esta condición.

La Costa Caribe presenta la situación más negativa, pues allí el subempleo afecta a casi el 60% de las mujeres rurales ocupadas. Asimismo, y en comparación con los promedios nacionales, tanto en el ámbito rural como en el urbano se incrementan las brechas de género en contra de las mujeres.

Gráfico No 9. Porcentaje de población ocupada en el sector informal en las cuatro ramas económicas principales por sexo

Ramas principales de actividad económica	País				Costa Caribe			
	Rural		Urbano		Rural		Urbano	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Actividades agropecuarias	83.6	79.3	71.3	60.9	86.9	82.2	76.5	84
Industria manufacturera	46.2	77.8	47.5	67.4	78.9	100	73.1	98.3
Comercio, hoteles y rest	78.8	98	73.5	88.1	90.9	97.4	79.5	90.6
Serv. Com. Soc y pers	30.2	62.4	26.8	50.3	9.5	45.5	22.1	40

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC. 2005

VI. A la vez, la inserción económica de la población en la Costa Caribe varía según sexo, identidad étnica, territorio y área de residencia. Por un lado, las mujeres afrodescendientes en las comunidades rurales se integran en el sector de la pesca y en el de pequeño comercio. Entre las mestizas destaca el comercio en sus casas o en puestos en los mercados locales. Las miskitas urbanas se integran en el sector servicios, pero en zonas costeras como Bilwi y Sandy Bay, las mujeres orientan su participación hacia actividades de acopio y comercialización de recursos marinos.

En el caso de la RAAN, el mayor peso de “trabajadores no remunerados”, tanto entre hombres como entre mujeres, y por “cuenta propia” entre los hombres, refleja el mayor carácter rural de esta región y la tipología de la economía indígena. En la RAAS, por ejemplo, el alto porcentaje (40,3%) de mujeres “empleadas/obreras” refleja la cantidad de mujeres kriols y mestizas que trabajan en instituciones públicas (en especial, salud y educación), así como en proyectos de cooperación. Los hombres se desempeñan principalmente como trabajadores por cuenta propia (productores y ganaderos, en el caso de la población mestiza, y pescadores entre la población kriol).

VII. Datos oficiales muestran que las mujeres trabajan en mayor número en actividades tradicionales, domesticas de uso personal, actividades que generalmente son muy mal remuneradas, porque son consideradas de baja complejidad en su elaboración. Mientras que los hombres trabajan en mayor proporción en actividades de más complejidad y relacionado con el mercado productivo. Esto hace que los ingresos de los hombres siempre serán mayores, y los de las mujeres tienden a ser menores. Además, es notorio que las mujeres siempre son colocadas en actividades manuales, de servicios, de apoyo, o de poca o ninguna complejidad. Mientras que los hombres se muestran creadores de valor, aunque el trabajo de la mujer es siempre creador de valor y de reproducción, pero, queda oculto. Esta situación se manifiesta en la RAAN tal y como se muestra en el cuadro siguiente:

Gráfico No 10. Personal femenino y masculino ocupado por actividad en la RAAS

Actividad/ocupación	Mujeres	Hombres	No. Establecimientos
Elaboración de productos de panadería	200	72	137
Fabricación de prendas de vestir, excepto de piel	44	8	44
Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones	29	128	26
Venta al por menor de otros productos en almacenes no especializados	299	140	217
Venta al por menor en almacenes no especializados con surtidos compuesto principalmente de alimentos, bebidas y tabaco	110	84	194
Restaurantes, bares y cantinas	66	28	38

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Económico Urbano, 2010 del INIDE

VIII. En cuanto a los ingresos por trabajo, se registra una desigualdad relevante. En el caso del ingreso laboral total promedio-hora de las mujeres ocupadas, la menor brecha se registra en las áreas rurales cuando se analiza en el nivel nacional (donde el ingreso femenino equivale a un 90% del masculino). En el área urbana nacional, el ingreso femenino se sitúa entre un 71% y un 75% del masculino correspondiente. Las brechas de ingresos varían según sector formal e informal, y en el caso de la ocupación principal presentan el comportamiento esperado: se incrementan en la actividad informal, salvo en las áreas rurales. Aquí la brecha en el sector informal es menor que en el sector formal (el ingreso promedio femenino equivale a un 92,2% del masculino).

En la Costa Caribe rural, las brechas de género en los ingresos son más pronunciadas que en el nivel nacional, al punto de registrar la mayor brecha de todos los grupos analizados (el ingreso promedio de las mujeres equivale a un 64% del de los hombres). Cuando se analizan las categorías o grupos ocupacionales, en la gran mayoría de los casos las brechas salariales se mantienen o se incrementan. Por ejemplo, en el caso del grupo de “patrones/empresarios” rurales en la Costa Caribe, el ingreso promedio de los hombres es más de tres veces el de las mujeres, lo cual podría indicar que éstas enfrentan mayores dificultades para desarrollar sus empresas. El grupo ocupacional de “trabajadoras/es de comercio y vendedoras/es” es otro ejemplo. Allí el ingreso promedio masculino es casi el doble del femenino.

3. Brechas en el acceso y control de los recursos productivos

- I. La propiedad. Este es un elemento clave para el empoderamiento económico de las mujeres. La propiedad particularmente de la tierra, permite el acceso a otros recursos como por ejemplo el crédito y, al mismo tiempo, puede incidir en la toma de decisiones económicas. Cabe destacar que existe una evidente desproporción entre el aporte de las mujeres al desarrollo agropecuario y su acceso al recurso tierra, así como a la propiedad de la vivienda.

Las cifras indican que para 2005 casi 9 de cada 10 fincas reportadas correspondían a hogares con jefatura masculina. Alrededor de un 24% de las fincas propias captadas por la EMNV 2005 INEC, 2005a no contaban con ningún documento. Entre las propiedades con documentos, más de 90% son individuales y el porcentaje de propietarios hombres supera en más de cinco veces el de propietarias.

Gráfico No 11. Distribución de las propiedades con documento por tipo

Ambitos territorial	Propietarios individuales		Colectivo				
	Hombre	Mujer	Pareja	Familia	Cooperativa	Otra	Total
Nacional	78.5	14.5	1.3	0.9	0.8	4.1	100
Urbano	81.8	13.6	1.4	0	0.9	2.3	100
Rural	78.1	14.6	1.1	1	0.8	4.4	100
Costa Caribe	79.1	15.4	1.7	0.6	0.9	2.3	100

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC. 2005

- II. Las brechas de género en el acceso a la tierra son mucho más marcadas si se introduce la variable del tamaño de las propiedades. Estas brechas se amplían en contra de las mujeres a medida que se incrementa el tamaño de la propiedad, mientras que se revierten en contra de los hombres en las propiedades de menor tamaño. En la Costa Caribe, donde las propiedades son generalmente más grandes, el mayor nivel de concentración de mujeres propietarias está en el rango de 5,01 a 10 manzanas (43% versus 6% de los hombres).

Gráfico No 12. Distribución de propietarios individuales por tamaño de las propiedades y por sexo

Rangos por tamaño	País		Costa Caribe	
	Hombre	Mujer	Pareja	Familia
Hasta 1 manzana	6.3	15.8	2.6	13.2
De 1.01 a 5 manzanas	21.9	28.1	20.6	26.4
De 5.01 a 20 manzanas	27.3	27.6	20.5	54.7
De 20.01 a 50 manzanas	24.2	20.4	27.8	3.8
De 50.01 a 100 manzanas	10.6	4.5	20.5	1.9
De 100.01 a 200 manzanas	6.2	2.2	13.2	0
De 200.01 a 500 manzanas	3	1.4	4.8	0
Más de 500 manzanas	0.6	0	0	0

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC. 2005

- III. A diferencia de lo que sucede en las áreas urbanas, la gran mayoría de los créditos rurales (70,3%) se otorgó a hombres. Las brechas de género a favor de estos últimos son mucho mayores cuando se considera la distribución de la masa crediticia total y los montos promedios resultantes, especialmente en las zonas rurales nacionales y de la Costa Caribe. Allí el monto promedio del crédito masculino supera en más de tres veces el monto promedio del crédito femenino. El grupo con menor acceso a crédito es el de las mujeres rurales de la Costa Caribe, quienes obtienen solamente el 18% de los préstamos otorgados y el 6,5% de la masa crediticia total correspondiente en las áreas rurales de esa macroregión, donde el acceso al crédito se considera un problema central para las mujeres.

Gráfico No 13. Distribución porcentual del crédito en efectivo y montos promedio por sexo

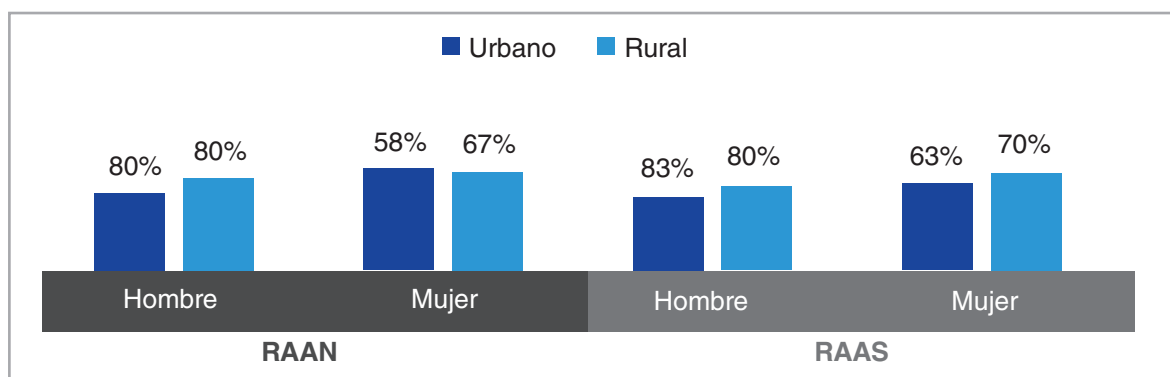
Variables	País				Costa Caribe			
	Rural		Urbano		Rural		Urbano	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Número de créditos	70.3	29.7	39.6	60.4	82.1	17.9	57.4	42.6
Masa crediticia total	89	11	52.1	47.9	93.5	6.5	72.3	27.7
Crédito promedio*	16	4.7	19.8	14.2	19.6	6.2	23.1	12.5
Razón crédito: promedio H/M	3.4		1.4		3.2		1.9	

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC. 2005

*En miles de córdobas

4. Salud

- I. En cuanto a los niveles de morbilidad, los datos de la EMNV de 2005 indican que las mujeres se enferman más que los hombres y que las brechas son mayores en las áreas urbanas. En las áreas urbanas las enfermedades crónicas afectan a una mayor proporción de mujeres que de hombres; en la RAAS la incidencia es mayor (el 8,4% de las mujeres versus el 4,2% de los hombres), aunque tales afecciones no son la causa de morbilidad más frecuente. En general, los motivos de ingresos hospitalarios de las mujeres están marcados por su proceso reproductivo y relacionados con el poco control que tienen sobre sus cuerpos (MINSA-RAAN y RAAS, 2005).
- II. En lo que respecta a las tasas de mortalidad, la única brecha de género significativa se da en la RAAS, donde la tasa de mortalidad masculina supera a la femenina en 10 puntos porcentuales (41,3% versus 31,2%). Esta diferencia está vinculada con las muertes de hombres por violencia en las zonas rurales mestizas del sur. Sin embargo, la calidad de la información sobre las causas de muertes por sexo se ve limitada por la ocurrencia de muertes en casas de habitación, por el subregistro de los diferentes tipos de cáncer como causa de muerte, y por las limitaciones en las estadísticas disgregadas por sexo y etnia, entre otros factores.
- III. Según los datos del Censo de Población y Vivienda de 2005 (INEC, 2005a), el acceso a agua de calidad y a sistemas de eliminación de excretas en la Costa Caribe es mucho más bajo que el promedio nacional. Ello predispone a una mayor morbilidad por enfermedades diarreicas, parasitarias y de la piel, las cuales figuran dentro de los principales motivos de consulta en estas regiones. En este contexto, el acceso a los servicios de salud sigue siendo un problema para toda la población, que encuentra su causa - según la percepción de las comunidades indígenas y étnicas - no sólo en la existencia de obstáculos geográficos (distancia y falta de disponibilidad de medios de transporte a las instalaciones de salud en las zonas rurales), sino también de orden cultural y de percepción negativa de la capacidad de respuesta de las unidades de salud.

Gráfico No 14. Porcentaje de población enferma por sexo

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC. 2005

5. Educación

- I. Según los datos del Censo de Población de 2005, las tasas de analfabetismo no presentan brechas significativas por género entre las Regiones Autónomas. Las brechas más importantes son las urbano-rurales; aproximadamente el 50% de los hombres y las mujeres son analfabetos versus el 20% de sus contrapartes urbanas. Se observan, sin embargo, algunas diferencias entre las dos Regiones Autónomas: la brecha de género es mayor en las áreas rurales de la RAAS (el 54% de las mujeres versus el 48% de los hombres son analfabetas). Los hombres rurales en la RAAS (en su mayoría mestizos) presentan un nivel de analfabetismo mayor al de los de la RAAN (53% versus 48%).

En la población de los Miskitu, el analfabetismo es cercano al 30%, porcentaje que se elevaría a un poco más del 40% si se incluyera a los que sólo saben leer. La exclusión de los pueblos indígenas de Nicaragua de los sistemas educativos se manifiesta en los altos índices de analfabetismo y en el bajo número promedio de años de estudio alcanzado, sobre todo en los niveles de educación media y superior.

Gráfico No 15. Nicaragua: grado de alfabetización en las comunidades étnicas

Pueblo o comunidad	Sabe leer y escribir	Sólo sabe leer	No sabe leer ni escribir	Total	Porcentaje analfabetismo
Rama	2,370	65	1,069	3,504	35%
Garífuna	2,134	34	609	2,777	22%
Mayangna	5,181	125	2,646	7,952	33%
Miskitu	70,062	2,674	29,391	102,127	29%
Ulwa	511	14	125	650	19%
Creole	16,393	261	1,471	18,125	8%

Fuente: elaboración a base de datos censo 2005 / Evaluación social y Plan para Pueblos Indígenas MAGFOR 2009

- II. Según los datos del Ministerio de Educación sobre la matrícula total en educación básica, no se registran diferencias significativas entre las Regiones Autónomas ni hay brechas de género en el acceso. No obstante, hay una brecha de más de 10 puntos porcentuales a favor de las mujeres en el nivel de secundaria, y otra de más de 10 puntos porcentuales a favor de los hombres en la educación de adultos. Otros indicadores de educación (tasas de repetición y de retención, por ejemplo) tampoco presentan brechas significativas. La excepción vuelve a ser la secundaria en la RAAN, donde la tasa de retención femenina (97,7%) es 10 puntos mayor que la masculina (87,7%), brecha ésta consistente con los roles de género en el área rural.
- III. En el nivel técnico existe segregación de género en las especialidades, aunque la participación femenina en sectores tradicionalmente considerados como masculinos, como el agropecuario y forestal, es mayor que en el nivel nacional. Esto es así especialmente en el caso de la RAAN, donde más del 23,6% de las mujeres matriculadas corresponde a especialidades en el sector agropecuario-forestal versus el 7,5% de la matrícula femenina nacional, con lo cual se refleja el tipo de actividades económicas de la zona.
- IV. Por otra parte, a diferencia de la situación nacional, hay brechas de género a favor de los hombres en el acceso a la educación técnica. La brecha más grande se registra en la RAAN, probablemente vinculada al alto nivel de ruralidad de esta región, con sus correspondientes problemas de movilidad para la población. En el nivel universitario, la brecha de género en el acceso no es significativa: el 49% de los estudiantes matriculados en la RAAN y el 53% en la RAAS son mujeres (URACCAN, 2006). La segregación de género en las especialidades persiste: las mujeres siguen concentrándose en carreras como sociología, ciencias de la educación, hotelería y contabilidad pública, y los hombres en agroforestería, pesca o administración de empresas.

6. Salud sexual y reproductiva

- I. En la Costa Caribe, las desigualdades son muy visibles en el comportamiento reproductivo. Las mujeres costeñas tienen sus hijos muy temprano (el porcentaje de adolescentes madres es alto y está por encima de los promedios nacionales), muy seguido (el porcentaje de mujeres con intervalo intergenésico corto supera el 30%, también por encima del indicador nacional, especialmente en el caso de la RAAS); y tienen más hijos/as en promedio que en el nivel nacional (por encima de los 3,5 hijos/as por mujer), con lo que se evidencia el escaso control que tienen sobre la reproducción. A esto contribuye el menor uso de métodos de planificación familiar (especialmente en la RAAS, donde el 45,5% de las mujeres los usan) y el bajo acceso a la esterilización femenina (12,3% y 18,5% de las mujeres en la RAAN y la RAAS, respectivamente).
- II. Según ENDESA 2006-2007, el embarazo adolescente o precoz (antes de los 15 años de edad) es más alto en la Costa Caribe pues el 22% de las jóvenes y adolescentes de 15 - 24 años, tuvieron su primer embarazo antes de cumplir sus 15 años de edad; este indicador es del 12% en las regiones del Pacífico y Centro-Norte; en Managua corresponde a un 9% de las mujeres en esas edades.

III. Por otra parte, la etnicidad es una variable determinante de las desigualdades reproductivas en la región, y Nicaragua es un ejemplo de ello. Se puede apreciar a los grupos indígenas de la RAAN y RAAS y a los mestizos costeños como los más rezagados en cuanto al avance de la fecundidad. Estos grupos presentan una Tasa General de Fecundidad con valores por encima o iguales al promedio nacional. Las tasas más altas las tienen los grupos étnicos que están ubicados en las áreas rurales más aisladas de las Regiones Autónomas del Atlántico: Mayangna-Sumu (8,6 hijos por mujer), seguidos por los Miskitu (6,3), los Ulwa (4,4) y los Ramas (5,6). En todos estos grupos se aprecian tasas superiores a las urbanas, que evidencian la presencia de mayores restricciones en el acceso a los servicios de educación y la salud.

Cuadro No 16. Tasa Global de Fecundidad por Grupo Etnico

Etnia	TGF	TGF Urbana	TGF Rural
Rama	4.2	2.63	5.64
Garífuna	3.7	2.93	4.69
Mayangna	8.3	5.15	8.59
Miskitu	5.2	3.76	6.30
Ulwa	4.2	5.28	4.39
Creole	2.9	2.93	3.16

Fuente: elaboración a base de datos censo 2005 / Evaluación social y Plan para Pueblos Indígenas MAGFOR 2009

IV. La mayor fecundidad de las mujeres costeñas se corresponde con las altas tasas de mortalidad materna: 265,7 en la RAAN (114 puntos por encima de la nacional) y 166,4 en la RAAS. Las tasas son significativamente más altas en las comunidades indígenas alejadas de centros urbanos, que registran incrementos cada año a pesar de las acciones que se impulsan para reducirlas. La mayoría, si no todos los indicadores que aquí se consignan, son un reflejo de los altos niveles de ruralidad de la Costa Caribe y del limitado poder de decisión que tienen las mujeres costeñas sobre sus propios cuerpos.

Gráfico No 17. Indicadores seleccionados de salud sexual y reproductiva (%)

Indicadores	RAAN	RAAS	País
Tasa global de fecundidad (TGF)	3.65	2.55	2.94
Tasa de natalidad	34	22	24
Mujeres entre 15 y 49 años	45	47.2	51.8
Mujeres 35+ que dieron a luz	20.4	16.6	4
Adolescentes que ya son madres	27.3	30.7	19.9
Menores de 15 años que ya son madres	1.2	1	0.8
Intervalo inter genésico corto (7 – 24 meses)	33.2	36	28
Tasa de mortalidad materna por 100,000 habitantes	265.7	166.4	151.7
Cobertura parto institucional	36.7	25	50
Prevalencia de uso de métodos de planificación familiar	45.5	62	65.5
Necesidades insatisfechas planificación familiar	28.1	16.4	14.7
Acceso a esterilización femenina	12.3	18.5	25.3

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC. 2005

- V. Como clara muestra de la forma en que la pobreza condiciona la maternidad y las probabilidades de sobrevivencia durante el primer año de vida, los datos del censo de 2005 revelan que el 51% de las madres indígenas de la RAAN y RAAS, y el 14% de las afro descendientes no asiste a ningún establecimiento de salud a la hora del parto.

Gráfico No 18. Lugar de atención del parto mujeres según adscripción étnica

Grupo	Establecimiento de salud	Casa particular	Otro lugar
Indígenas	48.7	47.2	4.1
Afrodescendientes	86.3	12.2	1.5

Fuente: elaboración a base de datos censo 2005 / Evaluación social y Plan para Pueblos Indígenas MAGFOR 2009

- VI. Por otra parte, las enfermedades de transmisión sexual (ETS) constituyen otro de los grandes problemas de salud en las Regiones Autónomas. De hecho, el Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS) de la RAAS registra que su incidencia ocupa el primer lugar, siendo las mujeres las más afectadas. Sin embargo, la alta proporción de mujeres afectadas por ETS versus los hombres, puede reflejar el hecho de que son ellas las que más buscan este servicio (el 96% de las consultas de las mujeres son a causa de ETS). Entre los hombres, que también se enferman y pueden ser portadores sanos, no son detectados debido a que los servicios están más dirigidos al aspecto reproductivo de las mujeres. Esta situación contribuye a perpetuar la cadena de transmisión.

7. Migración

- I. Ante la situación económica del país, la ausencia de políticas que brinden respuesta a las necesidades básicas de la población y la consecuente escasez de opciones de trabajo en la región, la migración laboral se ha convertido en una alternativa de inserción económica de importancia creciente, aunque todavía se carece de datos cuantitativos. Los destinos y/o las formas de esta migración laboral presentan diferencias según el pueblo indígena o comunidad étnica involucrados (CEIMM, 2006). A partir de los años ochenta, una de las formas más comunes de emigración es la conocida como ship-out, inicialmente protagonizada por hombres kriols, pero a la que se han ido incorporando mujeres kriols --y también de la etnia miskita-- a partir de los años noventa.

Si bien esta migración genera montos significativos de remesas familiares, tiene también efectos negativos, especialmente sociales: (i) desintegración familiar; (ii) incremento en los índices de enfermedades de transmisión sexual (entre ellas el VIH/SIDA); (iii) descapitalización de los recursos humanos formados en la Costa (tal es el caso de las enfermeras que emigran hacia Belice); (iv) estigmatización social y/o rechazo de las mujeres que hacen parte del fenómeno del ship-out, debido al alto nivel de acoso sexual que caracteriza esta actividad; y (v) menor incremento demográfico por sectores poblacionales.

Igualmente debe señalarse el impacto de las migraciones internas, tanto en el nivel colectivo (las comunidades) como individual. Tales migraciones se encuentran estrechamente relacionadas con la situación de explotación sexual comercial que viven las adolescentes, ya sea que sigan a sus padres o se queden bajo la tutela de parientes o amistades, así como con las condiciones laborales y falta de seguridad para las que emigran de las áreas rurales a las urbanas. Por último, cabe mencionar la inmigración proveniente de otras zonas del país vinculada al avance de la frontera agrícola, la cual no sólo está causando fuertes conflictos interétnicos sino también problemas de desintegración familiar entre, por ejemplo, la población rama.

8. Participación política

8.1. Asamblea Nacional

- I. La Asamblea Nacional, con función legislativa, constituye el foro político por excelencia entre todos los Poderes del Estado. En el parlamento, en términos generales, se reúnen los principales liderazgos de los partidos políticos, del ámbito nacional y departamental. La representación en la Asamblea está conformada por 90 integrantes, diputados y diputadas propietarias, a quienes se agrega el candidato a presidente que resulta en segundo lugar en las elecciones. Como puede apreciarse, la participación de mujeres en la Asamblea Nacional ha sido realmente escasa, con excepción del periodo 2012 – 2016 que alcanza una representación significativa a nivel de porcentaje en relación a los hombres.

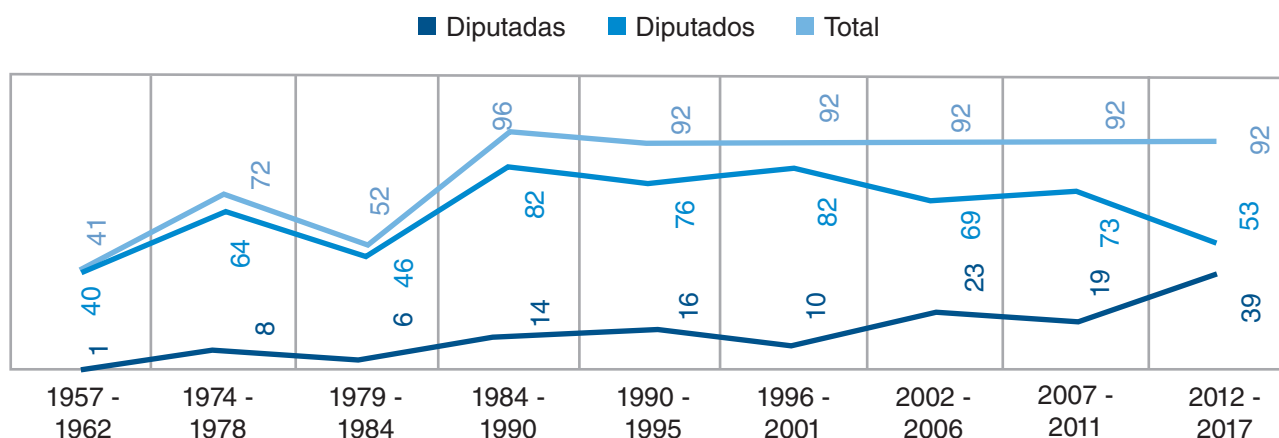
Gráfico No 19. Diputados Propietarios Asamblea Nacional por sexo

Variables	Hombres		Mujeres	
	Cantidad	%	Cantidad	%
1997 – 2001	82	89%	10	11%
2002 – 2006	71	77%	21	23%
2007 – 2011	72	78%	20	22%
2012 – 2016	56	61%	36	39%

Fuente: Elaboración propia / Diversas fuentes: CSE, Asamblea Nacional, otras. Mayo 2014

La incorporación de 36 mujeres en la Asamblea Nacional para el período 2012 – 2017 constituye un paso relevante en la lucha por la equidad de género en este espacio legislativo, al comparar lo que ha sido la historia parlamentaria de Nicaragua. Durante el período 1957 - 1962, se produce el acontecimiento de incorporar a una mujer al Congreso Nacional, lo que equivalía el 2.43% de los integrantes de este poder del estado (de 41 congresistas, 1 era mujer).

Ya para el período 1974 - 1978, de setenta y dos (72) congresistas, ocho (8) eran mujeres, lo que equivalía a 11.11%. En el período 1979 - 1984, de cincuenta y dos (52) representantes, seis (6) eran mujeres para un porcentaje del 11.53%. El período 1984 - 1990, de noventa y seis (96) diputados y diputadas eran catorce (14) mujeres, para un 14.6%. Para el período de 1990 - 1995, de un total de noventa y dos (92) escaños, dieciséis (16) fueron ocupados por mujeres, para un 17.39%.

Gráfico No 20. Número de mujeres diputadas Vs hombres diputados 1957 a 2014

Fuente: Asamblea Nacional de Nicaragua; elaboración propia del consultor. Mayo 2014

Y aunque el número de mujeres electas como diputadas propietarias ha mejorado significativamente durante los años, es preciso reformar la Ley Electoral (Ley 331) y el Estatuto de Autonomía de los Pueblos de las Regiones Autónomas (Ley 28), con el objeto de adecuar el número de Diputados Regionales electos ante la Asamblea Nacional a la población de cada Región Autónoma. Actualmente la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) solo cuenta con 3 Diputados Regionales y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) solo con 2, mientras otros departamentos como Chontales, Carazo y Masaya que tienen cantidad similar o menor población, bajo la Ley Electoral vigente tienen asignados 3 y hasta 4 Diputados respectivamente.

8.2. Alcaldías municipales

- I. En las elecciones para autoridades municipales se puede constatar la participación de las mujeres en la gestión pública local, en los cargos electivos principales. En las municipalidades, la proporción de mujeres electas como alcaldesas, ha mejorado paulatinamente hasta alcanzar la su mayor expresión durante el periodo 2013 – 2016; lo mismo ocurre con el cargo de Vice alcalde, el cual alcanzo su mayor auge en el periodo 2009 - 2012.

Gráfico No 21. Alcaldes y vice alcaldes por sexo, según periodo electoral

Periodo	Hombres				Mujeres			
	Numero		%		Numero		%	
	Alcaldes	Vice	Alcaldes	Vice	Alcaldes	Vice	Alcaldes	Vice
1997 – 2000	136	122	93.8	6.2%	9	23	6.2	15.9
2001 – 2004	138	117	91.4	8.6%	13	34	8.6	22.5
2005 – 2008	138	131	90.2	9.8%	15	22	9.8	14.5
2009 – 2012	129	62	84.31	15.69	23	90	15.03	58.82
2013 - 2016	76	77	49.67%	50.33	77	76	50.32	49.67

Fuente: Elaboración propia / Diversas fuentes: CSE, INIFOM Mayo 2014

8.3. Consejos regionales

- I. De acuerdo a la Constitución y a la Ley de Autonomía, en las regiones de la Costa Caribe se eligen, cada cuatro años, autoridades regionales. El órgano de decisión más importante es el Consejo Regional integrado por 45 concejales, tres por cada una de las 15 circunscripciones definidas para cada Región. Los municipios de Nueva Guinea, El Rama y Muelle de los Bueyes (RAAS) y Waslala (RAAN), no están integrados en el régimen de autonomía en lo que se refiere a la elección de concejales regionales.

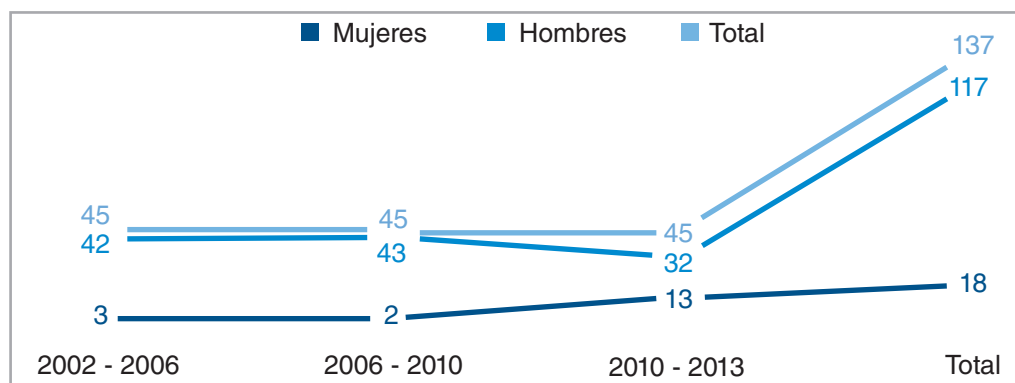
Gráfico No 22. Representación étnica Consejo Regional RAAN³ períodos 1998 - 2005

Etnia	Elecciones 1998		Elecciones 2001		Elecciones 2005	
	No concejales	%	No concejales	%	No concejales	%
1997 – 2000	23	48%	27	56%	25	52%
2001 – 2004	2	4%	1	2%	2	4%
2005 – 2008	21	44%	18	38%	19	40%
2009 – 2012	2	4%	2	4%	2	4%
2013 - 2016	48		48		48	

Fuente: Informe de Observación electoral / CEDEHCA

En relación al número de mujeres que han sido nombradas concejales en la RAAN que en los últimos tres períodos (2001 – 2013) es notorio el incremento que ha tenido aunque aún está muy lejos de ser equitativo; a como se observa en el gráfico siguiente de un total de 135 concejales regionales electos entre el 2002 y el 2013, un 87% (117) son varones y un 13% (18) son mujeres.

Gráfico No 23. Número de mujeres Vs hombres que han integrado el Consejo Regional – RAAN 2002 - 2013



Fuente: Asamblea Nacional de Nicaragua; elaboración propia del consultor. Mayo 2014

3. No ha sido posible obtener información desagregada por identidad étnica para el período 2006 – 2010 a pesar que se hizo una solicitud a funcionarios de ambos consejos regionales de tales datos.

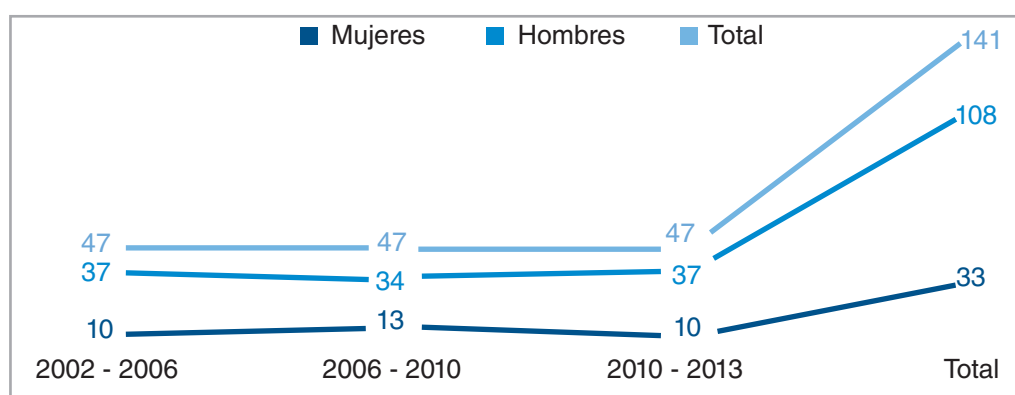
En relación a la integración por identidad étnica del consejo regional de la RAAS se observa la siguiente situación:

Gráfico No 24. Representación étnica Consejo Regional RAAS período 1998 a 2005⁴

Etnia	Elecciones 1998		Elecciones 2001		Elecciones 2005	
	No consejales	%	No consejales	%	No consejales	%
Mestizos	27	57.44	28	59.57	28	59.57
Kriol	7	14.89	9	19.14	10	21.27
Miskito	5	10.63	3	6.38	3	6.38
Garifuna	3	6.38	2	4.25	2	4.25
Mayangna	3	6.38	3	6.38	2	4.25
Rama	2	4.15	2	4.25	2	4.25
Total	48		48		48	

Fuente: Informe de Observación electoral / CEDEHCA

Gráfico No 25. Número de mujeres integrantes del Consejo Regional Autónomo – RAAS / 2002 a 2014

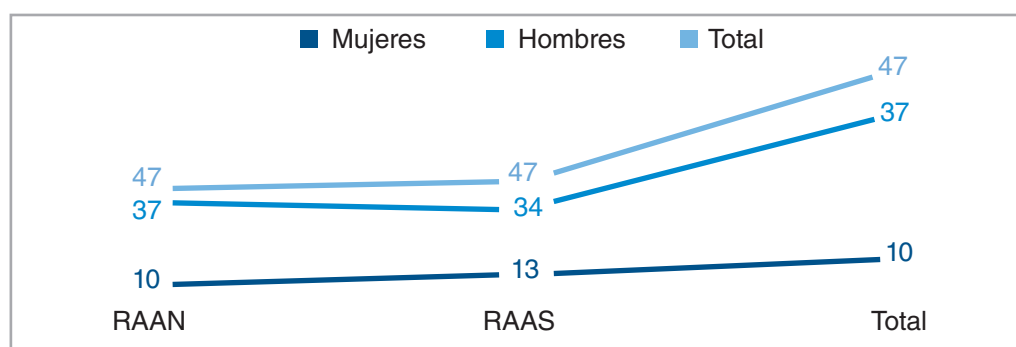


Fuente: Asamblea Nacional de Nicaragua; elaboración propia del consultor. Mayo 2014

Los datos anteriores indican durante 3 períodos han sido electos 141 concejales regionales de los cuales, el 23% (33) han sido mujeres y un 77% han sido hombres (108). Nuevamente y debido a la imposibilidad de obtener información de fuentes oficiales tales como el Consejo Supremo Electoral en ambas regiones autónomas, no ha sido posible obtener la identidad étnica de las mujeres electas durante estos tres períodos.

Al realizar un valoración global de la RAAN y RAAS se observa que de un total de 276 electos (as) durante tres períodos solamente el 18% (51) han sido mujeres.

4. No ha sido posible obtener la identidad étnica de los concejales regionales correspondientes a los períodos 2006 – 2010 y 2011 – 2014.

Gráfico No 26. Total de mujeres y hombres concejales regionales RAAN y RAAS 2002 - 2014

Fuente: Diversas fuentes bibliográficas / Elaboración propia del consultor. Mayo 2014

- II. Si bien se ha mejorado la inclusión de mujeres en los consejos regionales, el actual sistema de participación política ha resultado en la marginación progresiva de pueblos indígenas y afro caribeños en los procesos electorales. Este déficit se manifiesta en elecciones regionales que tienden a disminuir paulatinamente el número de representantes indígenas y afro descendientes electos a los Consejos Regionales Autónomos y la elección de candidatos mestizos en circunscripciones pertenecientes a las etnias indígenas y afro descendientes. Esto contradice el espíritu y letra de la Ley de Autonomía y constituye discriminación por cuanto una mayoría mestiza en los Consejos Regionales Autónomos toma las decisiones con respecto al proceso de Autonomía, en detrimento de sus sujetos fundamentales.

9. Medios de comunicación

- I. Los medios de comunicación aún continúan publicando información degradante y poco fehaciente acerca del acontecer político, social, económico y cultural de la Costa Caribe de Nicaragua. Esta información tiende a proyectar a los pueblos indígenas y afro descendientes como criminales, llegando incluso a reflejar la supuesta existencia de una “Cultura Narco” en algunas comunidades de la región. Este abordaje reduce el problema al simple hecho que la población de las comunidades desea involucrarse en estas actividades ilícitas, cuando el realidad, las redes del narcotráfico abarcan a todo el país, sin obviar que la Costa Caribe es estratégica geográficamente debido a que sirve como puente natural o vía de tránsito del sur donde se procesa la droga, hacia los mercados del norte donde se consume.

Grupos dedicados al tráfico ilegal de personas también se aprovechan de la ubicación geográfica de la Costa Caribe para la realización de actividades delictivas, facilitando la emigración ilegal desde América del Sur hacia Estados Unidos. Lo mismo se puede decir del tráfico de armas.

Los medios también tienden a ridiculizar las celebraciones culturales de los pueblos indígenas y afro descendientes, haciéndolas parecer degeneradas o pervertidas. De igual manera se burlan de los líderes y curanderos llegando incluso a satanizar sus prácticas y tradiciones, se promueve el uso de refranes discriminatorios, así como la caricaturización de indígenas y afro descendientes en los periódicos nacionales.

IV. (In) Seguridad ciudadana

1. A nivel nacional

En relación a la inseguridad ciudadana – entendida como el riesgo y la percepción de riesgo a ser víctimas de cualquier delito - Nicaragua tiene ventajas comparativas. Entre 1998 y 2009 presenta una de las mejores condiciones de seguridad de la región a pesar del incremento de sus tasas delictivas y del deterioro de la percepción social, las que sin embargo han sido menos aceleradas que en el resto de Centroamérica. Aun cuando, entre 2003 y 2009, la tasa de homicidio de Nicaragua aumentó en dos puntos (hasta un total de 16%), fue el incremento menos acelerado de la región. De igual forma, si bien el uso de armas de fuego en el país para la perpetración de homicidios fue del 56% -con una gran cantidad de armas en manos de la población-, constituyó el porcentaje más bajo de la región, dos puntos porcentuales por debajo de Costa Rica, país que no ha sufrido ningún conflicto bélico en más de sesenta años.

Por otra parte, la violencia intrafamiliar está reconocida desde 1996 como un problema de salud social, pero también como un delito criminal que puede ser perseguido por vía penal aun cuando no haya una demanda de por medio. Se traslapa fuertemente con la violencia contra las mujeres (violencia de género), aunque lógicamente no son idénticas: por un lado, es más amplia porque incluye también la violencia contra los niños, ancianos y hombres; por otro lado, es más limitada porque la violencia contra las mujeres también ocurre fuera de la familia.

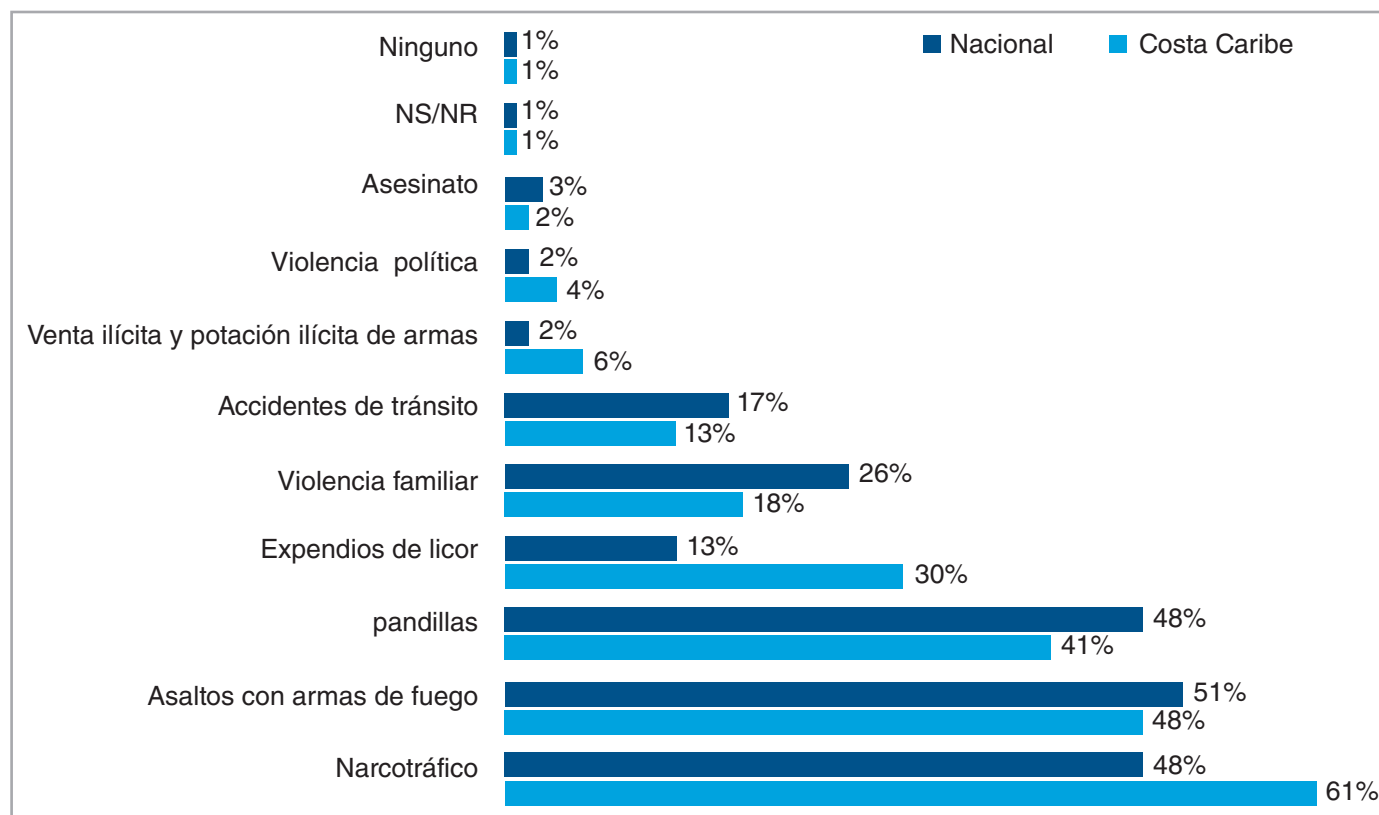
2. Costa Caribe de Nicaragua

En la V Encuesta sobre Seguridad Ciudadana año 2013⁵, la población encuestada en la Costa Caribe coincide con el resto del país en percibir al narcotráfico, los asaltos con arma de fuego y las pandillas, como los tres principales problemas de seguridad ciudadana. Sin embargo, su valoración varía en relación al promedio nacional.

Dado la relevancia del tema, se ha querido mostrar en un acápite aparte la situación de violencia que enfrentan las mujeres en la Costa Caribe de Nicaragua, usando datos oficiales provenientes de varias fuentes, especialmente de las Comisarías de la Mujer y la Niñez, de la Policía Nacional, de la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA 2006 – 2007) entre otras.

5. Desde el año 2007 el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) inició un seguimiento a la opinión y percepción de la ciudadanía nicaragüense sobre la seguridad ciudadana mediante la implementación de una encuesta anual, con el propósito de contribuir al análisis sobre la situación de la seguridad en Nicaragua y brindar un aporte para los tomadores de decisión de los diversos poderes del Estado y a todos los interesados en esta materia. Las encuestas sobre percepción de seguridad ciudadana sólo abordan la denominada inseguridad subjetiva, la cual no suele corresponder con la información de los registros estadísticos. Sin embargo, es fundamental incluir el factor de la percepción en el análisis de la situación de inseguridad en cualquier sociedad, ya que todo acto de la vida cotidiana está precedido de una percepción, comprensión, valoración y decisión que cada persona realiza de las situaciones que se le presentan.

Gráfico No 27. Percepción de la población sobre principales factores que generan inseguridad ciudadana / Comparación entre Costa Caribe y resto del país



Fuente V Encuesta nacional sobre percepción ciudadana, IEEPP, 2013

De manera particular, para la población de la Costa Caribe el Narcotráfico constituye el principal problema que enfrenta la región seguido de los asaltos con armas de fuego, las pandillas y los expendios de licor; algunos de los problema de inseguridad percibidos por la población se han mantenido a lo largo del periodo 2010 – 2012 tales como la violencia intrafamiliar y las pandillas, mientras que otros han surgido en el último año tales como el narcotráfico y los expendios de licor.

Gráfico No 28. Puesto de importancia como problema de seguridad ciudadana 2010 al 2013 Costa Caribe

Puesto	2010 (III Encuesta)		2011 (IV Encuesta)		2013 (V Encuesta)	
	Problema	%	Problema	%	Problema	%
1	Delincuencia común	64.1%	Pandillas	66.3%	Narcotráfico	60.9%
2	Pandillas	19.7%	Violencia intrafamiliar	38.2%	Asalto con armas de fuego	47.8%
3	Violencia intrafamiliar	9.9%	Asalto con armas	29.8%	Pandillas	40.9%
4	Falta de orden vial y peatonal	3.5%	Delincuencia común	28.1%	Expendios de licor	29.6%
5	Expendio de drogas	0.7%	Expendio de drogas	26.4%	Violencia intrafamiliar	18.3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la III, IV y V encuesta de Seguridad Ciudadana, IEEPP

Al consultar sobre los problemas de seguridad que perciben más en su lugar de residencia (barrio – comunidad) se observa que la población señala a los expendios de drogas y licor como de los problemas que más impacto tienen en su barrio – comunidad así como los asaltos con armas de fuego; para el año 2012 la violencia intrafamiliar aparece como un problema que afecta directamente el lugar de residencia de las personas encuestadas.

**Gráfico No 29. Problemas percibidos como de mayor frecuencia en sus lugares de residencia
Periodo 2010 – 2013 Costa Caribe**

Puesto	2010 (III Encuesta)		2011 (IV Encuesta)		2013 (V Encuesta)	
	Problema	%	Problema	%	Problema	%
1	Expendios de drogas	24.4%	Delincuencia común	30.3%	Violencia intrafamiliar	20.9%
2	Expendios de licor	21.4%	Pandillas	29.2%	Expendio de drogas	20.9%
3	Asaltos con arma de fuego	14.5%	Expendios de drogas	21.3%	Asalto con arma de fuego	19.1%
4	Robo a casas / comercios	12.2%	Expendios de licor	18%	Expendio de licor	13%
5	Delincuencia común	11.5%	Asaltos con arma de fuego	15.2%	Robo a casas / comercios	12.2%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la III, IV y V encuesta de Seguridad Ciudadana, IEEPP

Al preguntar sobre cuál es el problema de seguridad que perciben como de mayor crecimiento, se mencionan los expendios de licor y de drogas como los principales seguido de la violencia intrafamiliar; estos resultados sugieren la necesidad de atender estos señalamientos de la población en relación a lo que consideran los problemas de seguridad a nivel local.

**Gráfico No 30. Estadísticas comparativas sobre inseguridad ciudadana RAAS - RAAN
y otras zonas del país**

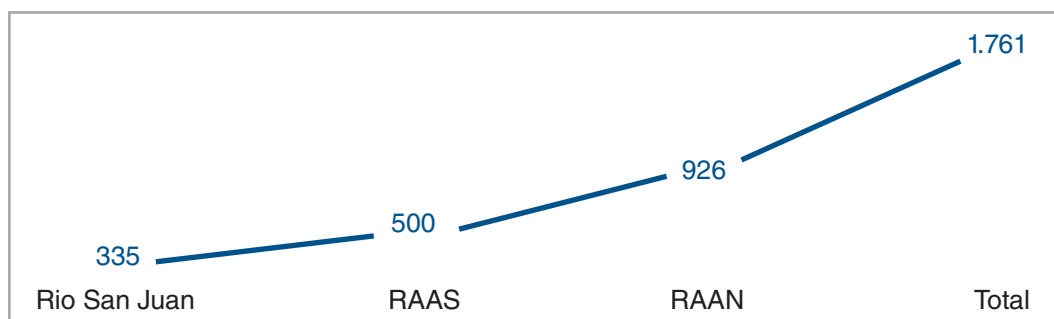
Zonas / Municipios	Tasa de Homicidio / 100 mil habitantes	Índice delictivo Robos / 100 mil Habitantes	Índice delictivo de Hurtos / 100 mil hab.	Delitos sexuales/ 100 mil hab.	Lesiones / 100 mil hab.	Denuncias por 100,000 hab.
Robos / 100 mil	12	390	181	61	171	
Habitantes	Índice delictivo de Hurtos / 100 mil hab.	Delitos sexuales/ 100 mil hab.	Lesiones /	124	327	2397
100 mil hab.	Denuncias por 100,000 hab.	291	162	99	97	2597
RAAN + triángulo minero	54	755	603	168	458	4,138
Managua	14	827	259	60	227	4402

Fuente: Acción Médica Cristiana (AMC) - 2012

V. Violencia de género

- I. La violencia de género es un problema serio en la Costa Caribe. La RAAN y la RAAS ocupan el tercer y quinto lugar, respectivamente, entre los departamentos con mayor prevalencia: más de 3 mujeres de cada 10 han sido víctimas. La RAAN presenta la prevalencia más alta de violencia física del país con 31.6%. La relación hombre - mujer como víctimas de violencia de género varía según las edades (CMN-Bluefields, 2005-2006): entre las víctimas de 13 años o menos esta relación presenta poca diferencia, pero a partir de los 18 años es casi cinco veces más frecuente entre las mujeres, incrementándose hasta casi ocho veces para las edades entre 36 a 40 años. A partir de este rango de edad, la relación se va reduciendo, aunque siempre es más frecuente en las mujeres.
- II. Datos recientes confirman esta tendencia. Durante el período Enero – Agosto 2010 la Comisaría de la Mujer registró un total de 22,161 denuncias de violencia intrafamiliar a nivel del país. De ese total, 1,761 corresponden a la Costa Caribe de Nicaragua (incluyendo Río San Juan) aunque la mayoría se concentran en la RAAN, incluyendo el triángulo minero, para un total de 926 denuncias (52% del total).

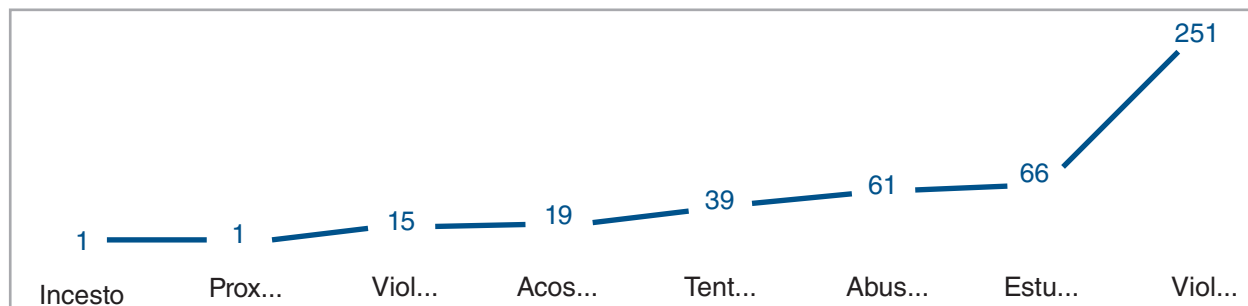
Gráfico No 31. Denuncias de violencia intrafamiliar Zona Especial / Enero – Agosto 2010



Fuente: Comisarías de la Mujer, PN – Octubre 2010 / RAAN incluye Rosita, Siuna y Bonanza

Durante este mismo período, se recibieron 453 denuncias por delito sexual de los cuales, las violaciones representan el 55% (251 casos) que tienen la siguiente clasificación: menores de 14 años, violaciones agravadas que son cometidas por el padre o hijo hacia la madre, por algún familiar cercano o que tiene alguna responsabilidad o dependencia de la víctima hacia su victimario.

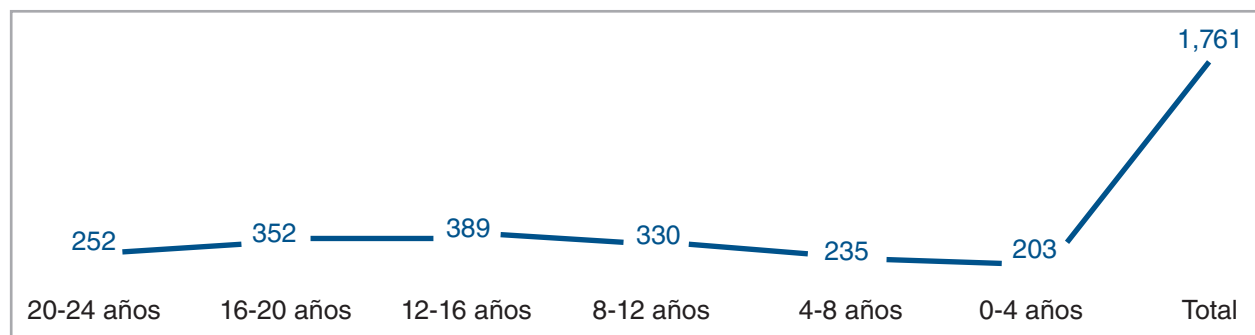
Gráfico No 32. Denuncias por violencia sexual / Enero – Agosto 2010



Fuente: Comisarías de la Mujer, PN – Octubre 2010 / RAAN incluye Rosita, Siuna y Bonanza

- III. Llama la atención que las mujeres menores de 13 años las que más sufren los delitos sexuales (44% del total) lo que evidencia que los daños psicológicos y físicos son graves.

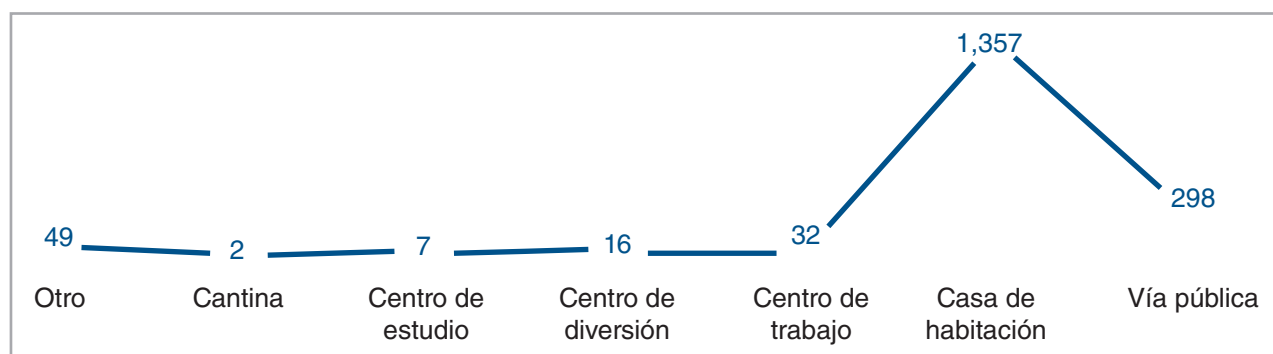
Gráfico No 33. Casos de delitos sexuales por rangos de edad / Enero – Agosto 2010



Fuente: Comisarías de la Mujer, PN – Octubre 2010

- IV. Los sitios de ocurrencia de estos delitos demuestra que la violencia sexual se produce dentro de los hogares y la ejecutan personas cercanas a las víctimas especialmente familiares.

Gráfico No 34. Lugar de ocurrencia delitos sexuales y violencia / Enero – Agosto 2010



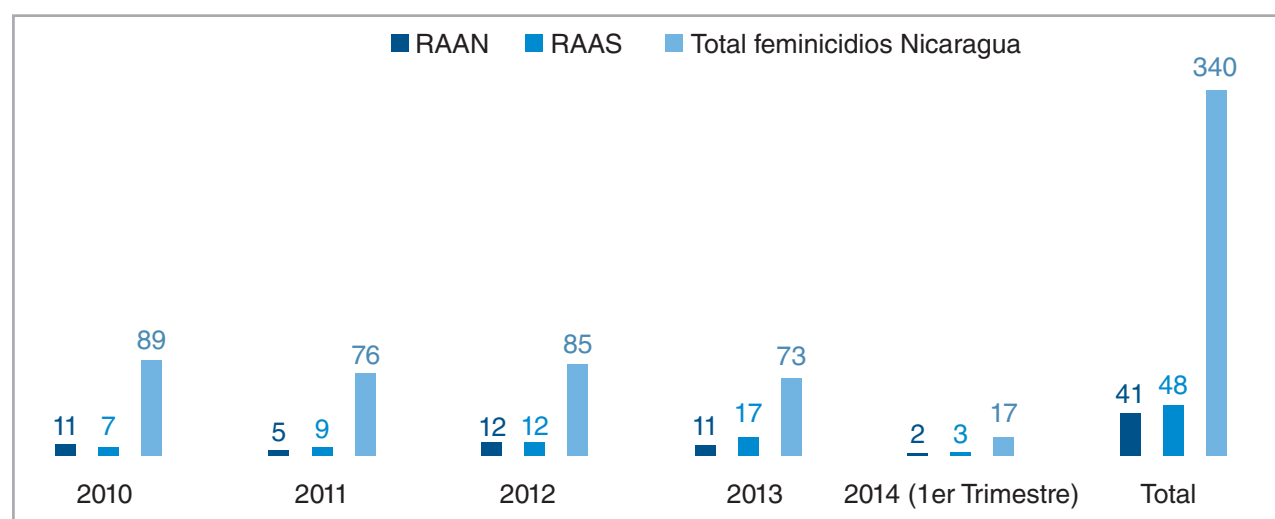
Fuente: Comisarías de la Mujer, PN – Octubre 2010

- V. Los delitos de violencia sexual, por su parte, siguen siendo casi en su totalidad denunciados por mujeres (96,2%). Los mismos datos indican que las mujeres atendidas por las CMN en Puerto Cabezas son en su gran mayoría miskitas (92,5%) y, en un lejano segundo lugar, mestizas (5%). En Bluefields las mestizas ocupan el primer lugar (65%) y las mujeres kriol el segundo (22%). Esta distribución refleja la composición étnica de la población de ambas zonas.
- VI. Por último, los delitos sexuales contra niñas y niños son un problema grave en la región, aunque los niveles de denuncia son muy bajos, especialmente en el caso del incesto. A esto contribuye también la costumbre de la justicia regional en la RAAN del talamano (pago de la sangre): las comunidades saben que el delito de violación no admite el perdón de las partes en los juzgados, y si se lleva a la cárcel al agresor no es posible hacer el cobro. Por esta razón las denuncias de este tipo son pocas. Las comunidades se rigen a través de un Consejo

de Ancianos y de un juez comunal. Este juez tiene competencia ante la comunidad para administrar justicia y para decidir qué delito se puede resolver internamente y cuál tendrá que ser llevado a las autoridades.

Por otra parte, el femicidio como una de las formas más extrema de la violencia se ha incrementado a nivel nacional y especialmente en la Costa Caribe de Nicaragua. Según datos elaborados por la Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV) durante los años 2010 al primer trimestre del 2014, a nivel nacional han ocurrido un total de 340 femicidios, de los cuales 89 de ellos (26% del total) han ocurrido en la Costa Caribe (41 en RAAN y 48 en RAAS). Si se considera que la población de ambas regiones autónomas es aproximadamente el 12.5% del total nacional, se puede valorar que este porcentaje acumulado de femicidios es exponencial. Esto se demuestra en año 2013, cuando ocurrieron 73 femicidios a nivel nacional, de los cuales 28 de ellos ocurrieron en la Costa Caribe acumulando un 38.35% del total.

Gráfico No 35. Comparación número de femicidios ocurridos en Costa Caribe (RAAN – RAAS) y resto del país / 2010 al 2014 (1er trimestre)



Fuente: Red de Mujeres Contra la Violencia, elaboración consultor mayo 2014



Segunda parte

Políticas públicas en Nicaragua y la Costa Caribe

I. Marco conceptual

Las políticas públicas son las respuestas que el Estado puede dar a las demandas de la sociedad, en forma de: (i) normas, (ii) instituciones, (iii) prestaciones, (iv) bienes públicos o servicios. En este sentido, está ligado directamente a la actividad del Estado en tanto ejecutor, es decir, aludiendo a la Administración del Estado, centralizada o descentralizada. Involucra una toma de decisiones y previamente un proceso de análisis y de valorización de dichas necesidades. Las políticas públicas siempre muestran que tan atendidas o desatendidas se encuentra una sociedad. En general, los teóricos de las políticas públicas han mostrado que estas tienen como finalidad desarrollar eficientemente acciones y/o servicios que vayan encaminadas a fomentar una relación coherente entre el Estado y la sociedad en general.

II. Normas jurídicas que contribuyen a la equidad de género en el país

Entre las principales normas jurídicas se observan las siguientes:

- I. Política de Protección Social: Esta política fue aprobada en 2003 y mediante ella se persigue la superación del asistencialismo en la atención a los grupos vulnerables. La propuesta denominada “Sistema de solidaridad para el desarrollo”, elaborada en el 2005 resultó atractiva a las instituciones y grupos que participaron en la Mesa Interinstitucional de Protección Social, coordinada por el Ministerio de la Familia. La administración de gobierno actual continúa con la implementación de esta política. Sin embargo, plantea otras prioridades sociales para la reducción de la pobreza, enfocadas al empoderamiento de grupos pobres y en extrema pobreza con un enfoque de seguridad y soberanía alimentarias. El Programa Hambre Cero beneficia directamente a las mujeres rurales empobrecidas. De igual manera, el Programa “Usura Cero” contempla el otorgamiento de microcréditos a mujeres urbanas.
- II. Política de Educación: Las políticas de educación para el período 2005 - 2006 enfatizaron en la ampliación del acceso y de la cobertura educativa, la transformación educativa en términos de calidad y diversificación de la oferta y la mejora de la rendición de cuentas y de la eficiencia. Con la administración de gobierno del Sr. Ortega se promulgó e hizo efectiva la gratuidad de la educación. Durante dicho período el avance en el crecimiento de la cobertura fue modesto y se observó una disminución de la tasa neta de educación Primaria. El programa de Educación para la vida llevado a cabo durante el mismo periodo, contempló la consejería a la población estudiantil en temas psico-afectivos. La actual administración de gobierno dará continuidad a este programa, el cual tiene entre sus componentes principales, la educación sexual para adolescentes y jóvenes con enfoque de género.
- III. Política de Salud: La Política Nacional de Salud establece como uno de sus lineamientos “lograr el cambio de la situación de salud de las personas, familias, comunidad y su entorno ecológico y social, equilibrando los cuidados preventivos, curativos y de rehabilitación, así como el trato respetuoso, cálido y humano que reciben en los servicios de salud, en condiciones de equidad, solidaridad, participación social y acceso a la atención” (MINSA, 2004). El instrumento que orienta la implementación de la Política de Salud es el Plan Nacional de Salud 2004 - 2015, el cual recoge un conjunto de metas que se incluyen en el Plan

Nacional de Desarrollo y se corresponden con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La política del sector prioriza la salud reproductiva de la mujer y no enfatiza en aspectos de género como el disfrute de su sexualidad, el control de su cuerpo ni la toma de decisiones relacionadas con su fecundidad.

- IV. Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades: Fue aprobada el 14 de febrero de 2008. La Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades contempla la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas del Estado, de los gobiernos municipales y regionales, así como en los distintos niveles de los entes autónomos y descentralizados. A través de ésta, se promueve la igualdad de derechos entre hombres y mujeres: humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La ley refiere además a los principios rectores, ámbito de aplicación, mecanismos y medidas prohibitivas, así como a la distribución de responsabilidades y competencias de las diferentes instancias y estructuras estatales, para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades desde la perspectiva de una ley, es decir, desde el principio de la obligatoriedad e ineludible cumplimiento de la misma.
- V. Política de Género: A inicios del nuevo gobierno se contaba con un borrador oficial de Política de Género para el período (2007 - 2011) que no retoma el contenido del Programa Nacional de Equidad de Género.⁶ En la Política de Género se reconoce que: la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho humano y una necesidad estratégica para la profundización de la democracia (...) y la construcción de una sociedad más justa y desarrollada socio económicamente (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 2007:2).
- VI. La Reforma a la Ley de Municipios o Ley 40, aprobada por la Asamblea Nacional (“Ley 50-50”), versa que la elección de alcaldes vicealcaldes y concejales debe presentar proporción de cincuenta mujeres y cincuenta hombres. Además de establecer nuevas funciones a los vicealcaldes.



III. Institucionalidad pública que favorece la equidad de género

Aunque es de suponer que el Estado Nacional y sus instituciones deben cumplir con las políticas de equidad, la realidad muestra que algunas instituciones – más que otras – son las que puntúan estos esfuerzos. Se destacan las siguientes:

- I. Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM). Lideró los esfuerzos conjuntos del Estado y la sociedad civil, y las acciones emprendidas para actualizar el Plan Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual. A partir del año 2007 ha modificado su estrategia, focalizando sus acciones en la capacitación dirigida a mujeres vinculadas al Gobierno en coordinación con el Programa de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.

6. El PNEG 2006-2010 fue elaborado durante la administración de Enrique Bolaños con el apoyo financiero de la cooperación internacional. Para su formulación se realizó una consulta con representantes de la sociedad civil y de instituciones gubernamentales. Los ejes de trabajo del programa fueron: educación, salud, gobernabilidad, producción y economía. El proceso de elaboración del mismo fue liderado por el INIM.

- II. Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia (CONAPINA). Constituido como el órgano rector al más alto nivel, encargado de coordinar la ejecución de la Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia y la formación e implementación de los Planes de Acción para la Niñez y la Adolescencia, dejó de funcionar a partir del año 2007. Se formuló y aprobó un Plan Nacional de Acción para la niñez y la adolescencia 2002 -2011 con el fin de integrar y potenciar todas las iniciativas, planes, estrategias y acciones nacionales que se han venido desarrollando en Nicaragua, para garantizar el cumplimiento de las diversas cumbres internacionales.
- III. Ministerio de Educación (MINED). Desarrolla acciones dirigidas a impulsar una cultura de paz, con el objetivo de promover actitudes positivas en el estudiantado y docentes. Cuenta con una red de consejeros docentes, con directrices hacia el nivel nacional, mediante los que se ha desarrollado un proceso de capacitación. El MINED trabaja con padres y madres de familia con el fin de fortalecer las relaciones con sus hijos e hijas, realizando esfuerzos que incluyen a docentes y a líderes de la comunidad, mediante la capacitación sobre la prevención del embarazo en adolescentes, fortalecimiento de la autoestima, el liderazgo en los estudiantes, resolución de conflictos, todos encaminados a reducir los niveles de violencia en el ámbito familiar y escolar.
- IV. Instituto de la Juventud. Cuenta con una Política Macro para el desarrollo integral de la juventud, que contiene ejes de educación, salud, empleo, participación, prevención y atención a la violencia. El eje de Prevención de Violencia lo ha implementado el programa denominado Desarrollo Juvenil y Prevención de Violencia. Posee un modelo multisectorial participativo surgido de la práctica, basado en el enfoque de derechos humanos que retoma elementos de salud pública.
- V. Ministerio de la Familia (MIFAMILIA) Sus acciones están encaminadas a sustituir la mentalidad asistencialista por una de desarrollo. En la prevención, el Ministerio está proyectando la formación de redes comunitarias de padres, madres y jóvenes, asimismo, el fortalecimiento de los centros de desarrollo infantil (CDI) y prevenir la violencia por medio de la atención a los niños de la calle con el proyecto AMOR. Se encuentra planificando la coordinación con el sistema de bienestar social en conjunto con otras instituciones y programas como ENABAS, Hambre Cero y Usura Cero, entre otros, para garantizar una respuesta integral. Se ha dado continuidad al Programa Preventivo de Atención a Niños y Adolescentes (PAINAR), incorporando a los padres y madres a través de la escuela para padres, madres y tutores, cuyo objetivo es contribuir en las relaciones padres, madres e hijos. Desarrollan los clubes de adolescentes, niños y niñas, donde se les capacitan sobre los temas de autoestima, VIH/ SIDA, explotación sexual, violencia intrafamiliar y sexual.
- VI. Ministerio de Salud (MINSA). El MINSA, ha iniciado un proceso de acreditación para capacitar a todas las casas maternas, en temas como derechos de las mujeres, violencia, promoción de lactancia materna, planificación familiar, salud sexual y reproductiva. Actualmente el MINSA está promoviendo la participación de los hombres en el abordaje de la violencia intrafamiliar; incluye capacitaciones a personal masculino de los Servicios Locales de Atención Integral en Salud (SILAIS), y adolescentes de organizaciones locales.

VII. Policía Nacional. La Policía Nacional está desarrollando actividades para la prevención de la violencia juvenil y la violencia intrafamiliar; en la implementación participan diferentes Direcciones de la Policía, a saber cómo la: (a) Dirección de la Comisaría de la Mujer y la Niñez: en la actualidad, la Comisaría de la Mujer y la Niñez, cuenta con 1400 promotoras voluntarias de origen comunitario, que dan cobertura en el ámbito nacional. (b) Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía que realiza trabajo de prevención en tres fases: (i) la prevención primaria con jóvenes que no tienen ningún riesgo. (ii) la prevención secundaria con jóvenes que no están detenidos y tienen conflictos con la ley, a quienes se les da tratamiento diferenciado para evitar continúe el riesgo. (iii) la prevención terciaria con jóvenes sancionados que están en el Sistema Penitenciario. Se han mejorado las condiciones de celdas correctivas, se han separado de los adultos y se han clasificado por sexo.

VIII. Procuradora Especial de la Mujer. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos: Da seguimiento a convenciones suscritas por el Estado. Su función le compromete con la denuncia y la demanda por los derechos de las mujeres. No existe reglamentación que defina las funciones para la procuradora especial de la mujer. Procuradora Especial de la Niñez y la Adolescencia.

IX. Comisión Permanente de Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional: Instancia especializada del Poder Legislativo para la formulación, promoción y reforma de leyes que benefician a las mujeres, niñez y adolescencia.

IV. Instrumentos y servicios a favor de la equidad de género en el país

Entre los principales instrumentos que el Gobierno de Nicaragua utiliza para operativizar las políticas públicas se mencionan los siguientes:

- I. Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012 – 2016. Incorpora claramente el enfoque de género a nivel de sus políticas y la define como prioridad del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional por garantizar todos los derechos de las mujeres.
- II. Estrategias de Abordaje de Equidad de Género y Equidad en acceso a los Servicios de Salud, Ministerio de Salud de Nicaragua. 2010
- III. Marco de Planificación para Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, Ministerio de Salud de Nicaragua, 2010.
- IV. Manual Operativo de los Proyectos Guiados por las Comunidades y los Gobiernos de los Territorios Indígenas. Nuevo FISE, Febrero 2011
- V. Desarrollo de Programas Nacionales en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Social tales como “Hambre Cero”, “Usura Cero”, que favorecen a mujeres de cara a satisfacer sus necesidades básicas.

- VI. Existencia de la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género en el Ministerio Público.
- VII. Instalación de los Juzgados de Familia.
- VIII. Creación de la Unidad especializada para combatir el delito de trata de personas en la Comisaría de la Mujer y la Niñez.
- IX. Estructuración de la Unidad Técnica de Género en la Asamblea Nacional que persigue impulsar la equidad en el quehacer legislativo de manera conjunta con las Comisiones de Trabajo.

V. Efectos tangibles de las políticas de género

Según un informe presentado por la Asamblea Nacional de Nicaragua (Datos estadísticos sobre igualdad y equidad de género en Nicaragua 2013 – Septiembre 2013) Nicaragua ha avanzado sustancialmente en reducir las brechas de discriminación así como las causas que las general, mostrando los siguientes logros:

- I. En la Asamblea Nacional para el período 2012-2016 de un total de noventa y dos escaños legislativos, treinta y nueve lo ocupan mujeres, es decir el 42.39%. De siete cargos en la Junta Directiva, cuatro son ocupados por mujeres, que representan el 57% de participación.
- II. Más del 50% de los cargos ministeriales son ocupados por mujeres; hay siete ministras; cuatro viceministras; tres directoras de entes descentralizados; tres codirectoras de entes descentralizados; las carteras de la Familia, Adolescencia, Niñez; Trabajo; Mujer; Salud; Educación; Medio Ambiente; Gobernación, tienen como titular a una mujer.
- III. En la Corte Suprema de Justicia, de un total de catorce magistraturas, hay una representación de cuatro mujeres (29%). De un total de cinco mil ochocientos ochenta y cinco espacios laborales en el Poder Judicial, tres mil trescientos diecinueve lo ocupan mujeres, es decir el 57% de las personas que laboran en el Poder Judicial como magistradas, juezas, secretarías judiciales, conciliadoras y otros ámbitos del Poder Judicial, son mujeres.
- IV. En el Parlamento Centroamericano Nicaragua cuenta con 21 diputados de los cuales 6 son mujeres (21%).
- V. La Procuraduría Especial de la Mujer, la Procuraduría de las Personas con Discapacidad y la Procuraduría de la Diversidad Sexual están dirigidas por una mujer.
- VI. En los Tribunales de Apelaciones dispone de una planilla del 40% integrada por mujeres.
- VII. En los Juzgados de Distritos, el 61% de los puestos lo ocupan las mujeres. Los Juzgados Locales también están integrados en un 60% por mujeres.

- VIII. Defensoría Pública: De un total de trescientos trece sillas de Defensoría Pública, doscientas cuatro, es decir el 65% lo ocupan mujeres;
- IX. Policía Nacional: Máxima representante de esta institución es una Mujer. Del total de personas que integran las filas de la Policía Nacional, que son trece mil ciento veintisiete personas, el 33% lo ocupan mujeres, desde la Primer Comisionada hasta miembros sin grados, que son personal civil dentro de la institución. Así mismo la mayoría de las direcciones están a cargo de mujeres.
- X. El Poder Electoral: De siete magistraturas, una la ocupa una mujer, que representa el 7%.
- XI. Red Interinstitucional de Igualdad y no Discriminación en el Empleo. Esta entidad se encuentra en el ministerio del trabajo y está liderada por una mujer.
- XII. Programas: Las mujeres han sido la prioridad en los programas económicos y sociales, Programa Usura Cero, Derecho al Acceso al Crédito, en los últimos años se ha otorgado un promedio de cuarenta mil créditos a mujeres por año, a tasas de interés justas del 5% anual. Programa Alimentario de Semillas, derecho a la asistencia técnica. Se ha dado asistencia técnica a más de doscientos mil socios productivos, de los cuales el 30% son mujeres.
- XIII. Instituciones que tienen Políticas de Género: Asamblea Nacional de Nicaragua; Poder Ejecutivo; Corte Suprema de Justicia; Policía Nacional; Ministerio Público; Gobiernos Regionales de la Costa Caribe (RAAN – RAAS).

Todo lo anterior incide para que Nicaragua ocupe el primer lugar en América Latina y el Caribe en equidad de género y el noveno a nivel mundial, según el informe sobre igualdad que publica el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) y que evalúa 135 países (el 93% de la población mundial) en función del grado de equilibrio social que han conseguido entre sexos. Esta valoración se atribuye a que hay muchas mujeres con responsabilidad ministerial y a que prácticamente ha acabado con la desigualdad en materia educacional. Reporte Global de Equidad de Género ubica a Nicaragua en noveno sitio en cuanto a oportunidades y en quinto nivel en relación al empoderamiento político; este informe indica que Nicaragua es el mejor país de Centroamérica. Del lugar 27, pasó al 9 a nivel mundial, acercándose a líderes globales.

El indicador donde está mejor ubicada es en “empoderamiento político,” en el que se encuentra en quinto lugar a nivel mundial, a la par de los países nórdicos que ocupan los primeros lugares. En relación a las demás naciones centroamericanas: Costa Rica está en el lugar 29, Panamá en el 40, Honduras en el 74, El Salvador en el 94 y Guatemala en el 116. Cuba es el siguiente país latinoamericano en la lista, en el puesto 19, debido al alto porcentaje de mujeres en puestos profesionales y técnicos (un 60 % del total) y a que tiene el mayor índice de mujeres parlamentarias del mundo (un 45,2 %).

VI. Normas jurídicas que contribuyen a enfrentar la exclusión y discriminación por asuntos de género e identidad étnica en la Costa Caribe

La Costa Caribe cuenta con un andamiaje jurídico que respalda la autonomía regional, la cual reconoce de manera diferenciada los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afro descendientes así como de los pobladores que pertenecen a los diversos grupos étnicos. Entre las principales leyes que respaldan esta diversidad se encuentran las siguientes:

- I. La Ley No. 28, Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica. Aprobada en 1987, en la que se establecen dos Gobiernos Regionales Autónomos exclusivamente para las Regiones del Caribe (Región Autónoma del Atlántico Norte y Región Autónoma del Atlántico Sur), retoma el principio constitucional de la multiculturalidad y pluriétnicidad de Nicaragua. Constituye la base para el respeto de los derechos individuales y colectivos de los grupos étnicos y comunidades que habitan en la Costa Caribe.
- II. Ley No. 162, de Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua. El Estado de Nicaragua establecerá programas especiales para el ejercicio de este derecho y proporcionará los recursos necesarios para su buen funcionamiento. Sin embargo y pese a la existencia de esta ley, la práctica muestra muchas carencias relativas al cumplimiento de la ley.
- III. La Ley No.582, Educación Autónoma Regional. Expresa el reconocimiento al funcionamiento de un subsistema educativo autónomo regional, orientado a la formación integral de las mujeres y hombres de los pueblos indígenas, afro descendientes y comunidades étnicas, basado en los principios de autonomía, interculturalidad, solidaridad, pertinencia, calidad, equidad, así como valores morales y cívicos de la cultura regional y nacional; comprometidos con el desarrollo sostenible, la equidad de género, derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

El Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR) Por incidencia de organizaciones de la sociedad civil costeña, particularmente CEDEHCA y URACCAN, se aprobó el 9 de mayo del 2006, la nueva Ley General de Educación de Nicaragua (Ley 582) que en su capítulo IV establece “las Regiones Autónomas cuentan con un Subsistema Educativo Autonómico Regional (SEAR) orientado a la formación integral de mujeres y hombres de los pueblos indígenas, afro descendientes y comunidades étnicas.” También establece “...la Autonomía Educativa Regional comprende la capacidad jurídica de las Regiones Autónomas de dirigir, organizar y regular la educación en todos sus niveles y conforme sus usos, tradiciones, sistemas de valores y culturas.”

- IV. La Ley General de Salud, No. 423. Expresa que el Ministerio de Salud (MINSA) debe expedir las normas e instrumentos de modelos de gestión institucionales, así como los requeridos para adelantar la descentralización, desconcentración y delegación dentro del sector salud; en lo concerniente a las regiones autónomas de la Costa Atlántica, el MINSA coordinará con los consejos regionales. Por otra parte, el reglamento No.68 de la Ley General de Salud,

sin perjuicio de lo ya dispuesto podrá transferir o delegar en las regiones autónomas, las facultades correspondientes en materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencias de medios financieros.

- V. El Modelo Regional de Salud en las Regiones Autónomas El artículo 8 del Estatuto de Autonomía y el Título II, Capítulo IV de la Ley General de Salud, constituyen la base jurídica de los pueblos costeños para demandar una atención de salud conforme a sus necesidades, culturas y tradiciones. Se señala que las Regiones Autónomas tienen la atribución de crear sus propias instancias de administración de la salud, así como definir sus Modelos y Planes Regionales, que luego deberán ser incorporados al Plan Nacional de Salud de Nicaragua. En ese sentido, se han creado las Comisiones de Salud de los Consejos Regionales Autónomos y las Secretarías de Salud, instancias regionales que tienen la función de elaborar y velar por la efectiva implementación de los Modelos y Planes Regionales de Salud en las Regiones Autónomas.
- VI. La Ley No. 445, Régimen de propiedad de los pueblos indígenas y comunidades étnicas. La ley garantiza a los pueblos indígenas y comunidades étnicas, el pleno reconocimiento de los derechos de uso, administración y manejo de las tierras tradicionales y sus recursos naturales, lo cual configura al régimen administrativo de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, como la unidad base política y administrativa, diferenciándolo del resto del país.
- VII. La Ley No. 59 de División Política Administrativa, en el Arto. 3. Expresa que el Poder Ejecutivo, para la administración del territorio nacional, establecerá su organización y funcionamiento del nivel central al nivel departamental y municipal, se exceptúan las Regiones Autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur, por lo que se considera necesario establecer un periodo de transición entre el nivel central y regional a fin de que las entidades nacionales transfieran las capacidades técnicas, administrativas y financieras a los consejos y gobiernos regionales que garantice por una parte; la asistencia técnica y capacitación para asumir las especialidades sectoriales y por la otra, una adecuada apropiación y conducción estratégica de las políticas y estrategias regionales para garantizar una efectiva regionalización y sostenibilidad del proceso.
- VIII. La Ley de Pesca y Acuicultura No 489. Establece que en la explotación de los recursos hidro biológicos del Mar Caribe se deberá reconocer los derechos establecidos para las Regiones Autónomas en la Constitución Política, Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica y demás legislaciones vigentes. Las atribuciones y competencias de la Regiones Autónomas en la administración pesquera.
- IX. La Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. Establece que el Poder Ejecutivo como parte integrante del Estado, actuará armónicamente y coordinado con los demás Poderes del Estado, con los Gobiernos Regionales de las Regiones Autónomas y con los Gobiernos Municipales, todo de acuerdo a la Constitución Política y las leyes.

- X. La Ley No.612, de Reforma y Adición a la Ley 290, de las Secretarías y Consejos Presidenciales. Expresa que una de las secretarías o consejos de la Presidencia, será la instancia responsable de establecer la relación de coordinación entre los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Caribe y los distintos Ministerios de Estado, de acuerdo con lo establecido en la Ley No.28 Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica.
- XI. Decreto 19-2008, declara en Régimen Especial de Desarrollo. Declara en Régimen Especial de Desarrollo para fines de atención del Ejecutivo a los Territorios Indígenas: Miskitu Indian Tasbaika Kum, Mayagna Sauni Bu y Kipla Sait Tasbaika, ubicados en la Cuenca del Alto Wangki-Bocay y Bocay; cuyas sedes administrativas serán la Comunidad de San Andrés de Bocay, sin detrimento de la autonomía municipal.
- XII. La Ley de Participación Ciudadana, No 475. Expresa que los Consejos Regionales, procederán a la creación del Consejo Regional de Planificación Económica y Social, que también será conocido como CORPES, el cual tendrá carácter consultivo, participativo y podrá servir de apoyo para la redacción de propuestas, así como evaluar las políticas económicas y sociales de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe. Asimismo, establece que el CORPES es presidido por el Coordinador de Gobierno Regional respectivo.

Un primer acercamiento a todo el conjunto de leyes anteriores permita saber que las mismas no abordan de manera específica el tema de la equidad de género ni establecen pautas para implementar acciones que contribuyan a reducir las brechas de discriminación que enfrentan las mujeres en la Costa Caribe. Se trata de un grupo de leyes que abonan a enfrentar la exclusión y discriminación que viven los pueblos indígenas y comunidades afro descendientes, contribuyendo a establecer un marco legal que contribuya a la superación de las causas estructurales.

VII. Instrumentos jurídicos que favorecen los derechos de pueblos indígenas, comunidades afro descendientes, jóvenes, adolescentes y mujeres

Así como la Costa Caribe cuenta con un marco legal que sustenta los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y afro descendientes, paulatinamente se han formulado un conjunto de instrumentos legales que incorporan la equidad de género como parte de sus contenidos. Se destacan los siguientes:

- I. Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe y Alto Wangki Bocay / Para el Buen Vivir y el Bien Común 2012 – 2016. Se deriva del PNDH y establece una visión que permite formular una estrategia consultada en los diferentes sectores de cada una de las Regiones Autónomas del Caribe. Esta estrategia, junto al Plan NICARIBE 20-20 y los Planes Regionales de la RAAN y la RAAS, sirvieron para definir el contenido esencial del actual Plan de Desarrollo de la Costa Caribe.

Establece el Programa Familia, niñez, adolescencia, juventud y mujer junto al resto de Programas del Plan que tiene como objetivo garantizar y dar seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas relacionadas a la protección de los derechos y garantías de niñas, niños,

adolescentes, juventud, la mujer y la familia como derechos de orden público, irrenunciables, interdependientes e indivisibles, ya que el ser humano es el centro de esta estrategia y a quien se dirige su accionar. En relación a los derechos de la mujer se establece que se trabajará para propiciar igualdad entre hombres y mujeres, se promoverá el cumplimiento de los derechos de la mujer a fin de construir una sociedad más justa y equitativa.

Para ello, se incorporará el enfoque y práctica de género en las políticas públicas regionales y el sistema de planificación regional, con el objetivo de lograr acciones y presupuesto con equidad y prácticas de género como elemento de desarrollo.

- II. Establecimiento de la Secretaría de la Mujer en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). Aprobada mediante Resolución No. 282-220408 del Consejo Regional.
- III. Formulación de la Política de Equidad de Género de la RAAS. Aprobada en el año 2008 por el Consejo Regional, mediante Resolución No. 284- 220408.
- IV. Aprobación de la Agenda Parlamentaria de las Concejalas del Consejo Regional de la RAAS, mediante Resolución 285 -220408.
- V. Diseño de la Política de Atención, Protección y Prevención de la Violencia contra las Mujeres en la RAAS. Aprobada en el año 2008 mediante Resolución No. 286-220408 del Consejo Regional.
- VI. Política de igualdad de género en el contexto de los Pueblos Indígenas y comunidades étnicas de la Región Autónoma del Atlántico Norte. Aprobada por Resolución 04-03-11-2010, el 03 de Noviembre del 2010
- VII. Creación y aprobación de la Comisión Regional de la Juventud en RAAN y RAAS – 2010, con el apoyo del Programa Voz Joven.
- VIII. Formulación y aprobación de la Política, Estrategia y Plan Regional para el Desarrollo de la Adolescencia y Juventudes de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) 2010-2014
- IX. Formulación y aprobación de la Agenda de adolescentes y jóvenes de la Región Autónoma del Atlántico Sur. 2010
- X. Formulación y aprobación de Agenda parlamentaria regional de adolescentes y jóvenes de la Región Autónoma del Atlántico Sur. 2010
- XI. Elaboración y aprobación de Manual de funcionamiento de las comisiones de salud comunitarias; con énfasis en la promoción de la salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes, conforme al Modelo de Salud y MASI-RAAN
- XII. Comisión Regional de Lucha Contra el SIDA (CORLUSIDA), instancia que surge para dar respuesta a la epidemia del VIH y Sida. Nace en la RAAN dentro del marco de la Ley 238 y representa a la Comisión Nacional de Lucha contra el Sida (CONSIDA) en la RAAN.

- XIII. Formulación y aprobación de Estrategia de VIH y de Sida y Salud Sexual y Reproductiva del municipio de Waspam Río Coco 2011 - 2015
- XIV. Elaboración y aprobación de los artículos 61, 62 y 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que reconoce, se debe incorporar el Derecho Consuetudinario al Modelo de Administración de Justicia en las Regiones Autónomas.
- XV. Institucionalización del 30 de octubre como Día de la Autonomía.
- XVI. Tipificación del Delito de Discriminación Racial en el Código Penal, aprobado por la Asamblea Nacional mediante Resolución 09-2007, el 21 de Marzo del 2007 y posteriormente incorporada al nuevo Código Penal de Nicaragua, aprobado por la Asamblea Nacional el 13 de Noviembre del 2007. Con la tipificación del delito de discriminación en el nuevo Código Penal, por primera vez en Nicaragua se cuenta con una definición de discriminación racial y se establecen sanciones a aquellos individuos que cometan delitos de esta naturaleza.
- XVII. Inserción de la perspectiva costeña dentro de la propuesta de Ley de Acceso a la Información Pública. La propuesta incluía la incorporación del Principio de la Multietnicidad y la No Discriminación dentro de la Ley; la armonización de la Ley de Acceso a la Información Pública con los artículos 11, 14, 15, 22, 23 y 25 de la Ley de Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua (Ley 162) y el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas de Nicaragua (Ley 28). El establecimiento de las Oficinas de Coordinación de la Información Pública en los Gobiernos Regionales Autónomos. La participación equitativa de pueblos indígenas, afro descendientes y mestizos de la Costa Caribe en la Comisión Nacional de Acceso a la Información Pública. Y la traducción de la información pública a lenguas de la Costa Caribe de Nicaragua.
- XVIII. Institucionalización del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial (Marzo 21). Se apoya en la Resolución 09-2007 de la Asamblea Nacional de Nicaragua que señala: (a) Se reconoce el 21 de Marzo (Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial) como efeméride nacional. (b) Los Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional se comprometen a apoyar la incorporación de la Propuesta de Tipificación del Delito de Discriminación Racial al Código Penal de Nicaragua. (c) Los Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional se comprometen a apoyar la aprobación de la Convención Interamericana para la Eliminación de la Discriminación Racial.
- XIX. Resolución de la Corte Centroamericana de Justicia la cual establece: (a) Unirse a la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial y exhortar a todos los Estados que conforman el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), a que velen por el irrestricto respeto a los Derechos Humanos consagrado tanto en el Sistema de Protección Universal, en el Sistema Interamericano y el Sistema de la Integración Centroamericana. (b) Transmitir esta Resolución al Secretario General de las Naciones Unidas.

XX. Implementación del Proyecto Pana Laka por parte de los Gobiernos Regionales RAAN – RAAS con apoyo del PNUD, a través del cual se ha propiciado el enfoque de género en el fortalecimiento de las Juntas Directivas de los Gobiernos Territoriales, promoviendo la participación de las mujeres, facilitando espacios para sus intervenciones, opiniones y consultas, y haciendo concientización con los hombres sobre los derechos de las mujeres y niños. Como avance se ha logrado que se elijan al menos 2 mujeres en cada Junta Directiva y que se perciba mejor estima de ellas por los demás.

A la vez, este proyecto ha apoyado la creación de diversos instrumentos de políticas públicas: Agenda Regional de las Mujeres; Agenda Parlamentaria de las Concejalas Regionales; Conformación de la Secretaría de la Mujer; Política de Equidad de Género en la Región; Política de Atención, Protección y Prevención de la Violencia contra las Mujeres en la RAAS. Cuatro de estos instrumentos son normativas aprobadas por el Consejo Regional en el año 2008 y constituyen un avance significativo en la aplicación del enfoque de género en las políticas públicas. Otros avances de la Contraparte han sido la organización y estructuración de secretarías municipales de la mujer en Paiwas, La Cruz de Río Grande, Bluefields, Corn Island, El Tortuguero y Desembocadura de Río Grande.

VIII. Avances en la equidad de género y la inclusión de mujeres en cargos públicos y de decisión en la Costa Caribe

Desde ha algunos años los diversos gobiernos nacionales han realizado esfuerzos por propiciar una mayor inclusión de las mujeres en cargos públicos y de elección popular. Los resultados han sido modestos en algunos ámbitos y nulos, en otros. El actual gobierno de Nicaragua (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional) ha retomado este esfuerzo y ha dado pasos específicos para lograr este propósito; según analistas externos, estos esfuerzos han dado resultados positivos y ubican al país en un puesto privilegiado muy por encima de otros países incluyendo algunos industrializados. En el caso de la Costa Caribe, se observan algunas manifestaciones de esta situación entre las que se destacan las siguientes:

- I. Para el periodo 2012 – 2016, de un total de 5 diputaciones para la Costa Caribe (3 RAAN – 2 RAAS), 2 de ellas (40%) fueron ocupadas por mujeres y 3, por varones (60%). De las 5 diputaciones, 2 de ellas fueron ocupadas por mestizos (40%), otras 2 por miskitos (40%) y 1 por kriol (20%). Llama la atención que la diputada kriol pertenece a la RAAN, región en donde el porcentaje de esta población es mucho menor que en la RAAS en donde se concentra la mayor cantidad de personas que se identifican con este grupo étnico.

Gráfico No 36. Diputados Propietarios de la Costa Caribe - Asamblea Nacional por sexo e identidad étnica 2012 - 2016

Identidad Étnica	RAAN		RAAS	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Mestizo			2	
Miskito		1	1	
Kriol		1		
Total		2	3	

Fuente: Elaboración propia / Diversas fuentes: CSE, Asamblea Nacional, Mayo 2014

Una de las diputadas de la RAAN (de identidad kriol) pertenece a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional ejerciendo el cargo de Primera Secretaria del Parlamento.

- II. A nivel municipal, de un total de 20 municipios involucrados en las dos últimas elecciones municipales (12 RAAS – 8 RAAN), solamente 7 mujeres han sido electas como alcaldes (2 durante 2009 – 2012 / 5 de ellas en 2013 - 2017). Aunque la proporción de mujeres alcaldesas ha mejorado, la misma es mucho menor que lo que se observa a nivel nacional.

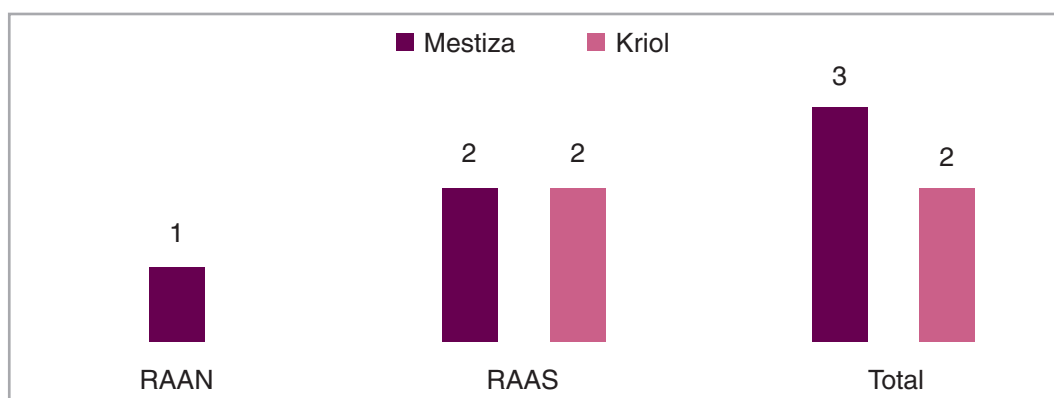
Gráfico No 37. Alcaldesa RAAN – RAAS dos últimas elecciones municipales por sexo

Identidad Étnica	RAAN		RAAS	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
2009 – 2012	7	1	11	1
2013 – 2016	7	1	8	4

Fuente: Elaboración propia / Diversas fuentes: CSE, Asamblea Nacional, otras. Mayo 2014

Para el período 2013 – 2016, la distribución de mujeres alcaldesas según identidad étnica es la siguiente:

Gráfico No 38. Identidad étnica de alcaldesas RAAN – RAAS período 2013 - 2016



Fuente: Comisarías de la Mujer, PN – Octubre 2010 / RAAN incluye Rosita, Siuna y Bonanza

- III. En las últimas elecciones regionales (Marzo 2014) se lograron elegir un total de 37 mujeres de un total de 90 consejales en ambas regiones autónomas, lo que indica que este porcentaje es superior a todas las elecciones regionales anteriores. Puede observarse que en para el periodo 2014 – 2017, en la RAAN las mujeres lograron un 49% de los cargos regionales y en la RAAS fue del 44%, lo que significa un incremento importante en relación a la elección del 2010 – 2013. Sumando en número de mujeres en ambas regiones, se observa que alcanzaron un 44% (42 mujeres) del total de concejales electos (90 en total) de ambas regiones autónomas, lo que sienta un precedente importante en este tema.

Gráfico No 39. Mujeres electas consejos regionales periodo 2010 - 2017

Periodo	RAAN		RAAS	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
2010 – 2013	33	12	36	9
2014 – 2017	23	22	25	20

Fuente: Elaboración propia / Diversas fuentes: CSE, Mayo 2014

Al valorar la identidad étnica de las mujeres electas, se observa que en la RAAN, la mayoría de ellas son miskitas seguidas de mestizas; en la RAAS, la mayoría son mestizas seguidas de kriol y en menor número son garífunas y Ulwas (Mayangna). Al sumar el total de concejales mujeres por identidad étnica en ambas regiones, se observa que las mestizas son mayoría seguida de miskitas y kriol. Si bien hay un número mayor de mujeres en este parlamento regional, es también cierto que la mayoría son mestizas en detrimento especialmente de mujeres indígenas (Rama, Mayangna y miskitas).

Gráfico No 40. Identidad étnica de mujeres integrantes de Consejo Regionales RAAN – RAAS período 2014 - 2017

Institución	RAAN	RAAS	Total
Mestiza	9	10	19
Miskita	11		11
Kriol	1	5	6
Garífuna		2	2
Mayangna	1	2	3
Rama		1	1
Total	22	20	42

Fuente: Entrevistas funcionarios municipales / Abril 2014

IV. Un porcentaje de mujeres están en cargos de dirección y coordinación ministerial a nivel municipal. Por ejemplo, en el municipio de Bonanza de un total de 15 instituciones de gobierno, en 7 de ellas hay mujeres en los puestos de coordinación municipal (47% del total). En el caso del municipio de Siuna, de un total de 15 instituciones, 7 son coordinadas por mujeres (47% del total). En ambos municipios, todas estas mujeres son de identidad mestiza.

Gráfico No 41. Mujeres que ocupan cargos de dirección ministerial a nivel municipal año 2014

Institución	Municipio	
	Bonanza	Siuna
1. Magfor	Varón	Mujer
2. Marena	Varón	Mujer
3. Mined	Varón	Mujer
4. Mifamilia	Mujer	Mujer
5. Minsa	Mujer	Varón

Institución	Municipio	
	Bonanza	Siuna
7. Procuraduría de Derechos Humanos	(No hay)	Mujer
8. INSS	Mujer	Mujer
9. ENEL	Varón	Varón
10. Enatrel	(No hay)	Varón
11. Correos de Nicaragua	Mujer	Varón
12. Intur	Mujer	(No hay)
13. Ministerio Público	Mujer	Varón
14. Ministerio de Energía y Minas	Mujer	(No hay)
15. Inafor	Varón	Varón
16. Mefcca	Varón	Varón
17. Inta	(No hay)	Varón

Fuente: Entrevistas funcionarios municipales / Abril 2014

- V. Al valorar la situación de las delegaciones regionales – departamentales en Bilwi (Puerto Cabezas - RAAN) y Bluefields (RAAS), ambas como cabeceras regionales, se observa la siguiente situación: en Bilwi – RAAN de 24 instituciones y dependencia de gobierno central, 10 de ellas están bajo la coordinación de mujeres, para un 42% del total. Mientras tanto en Bluefields – RAAS, de 24 instituciones de gobierno central, 9 de ellas están bajo coordinación de mujeres para un 37% del total.

Gráfico No 42. Mujeres que ocupan cargos de dirección ministerial a nivel regional – RAAN (Bilwi) – RAAS (Bluefields) año 2014

Institución	Bonanza	Siuna
Magfor	Mujer	Varón
Marena	Mujer	Mujer
Mined	Varón	Mujer
Mifamilia	Mujer	Mujer
Minsa	Mujer	Varón
Inatec	Varón	Varón
INSS	Mujer	Mujer
ENEL	Varón	Varón
Correos de Nicaragua	Varón	Mujer
Intur	Mujer	Mujer
Ministerio Público	Varón	Varón
Inafor	Varón	Mujer
Mefcca	Mujer	Varón
Inta	Varón	Varón
Empresa Nacional de Puertos	Varón	Varón
Ministerio de Transporte e Infraestructura	Varón	Varón
Procuraduría General de la República	Mujer	Varón
Dirección General de Aduanas	Varón	Varón
CAMPIME	Mujer	(No hay)

Institución	Bonanza	Siuna
Ministerio de Gobernación	Varón	Varón
Consejo Supremo Electoral	Varón	Varón
Mitrab	Mujer	Mujer
Enacal	Varón	Mujer
Fise	Varón	Varón
Procuraduría de derechos humanos	(Sin datos)	Mujer

Fuente: Entrevistas funcionarios municipales / Abril 2014

No fue posible obtener información sobre la identidad étnica de las mujeres que ocupan estos cargos ministeriales.

IX. Conclusiones

1. En general, en el análisis documental realizado muestra que Nicaragua dispone de un andamiaje legal importante para avanzar contra la discriminación de género que enfrentan las mujeres. Se han elaborado y aprobado políticas, programas y planes nacionales para atender la problemática de la violencia, especialmente para su inclusión en espacios de participación política. Una situación similar se observa en la Costa Caribe de Nicaragua, donde existen instrumentos legales que favorecen el abordaje de factores estructurales e institucionales que inciden en la exclusión y equidad de género. De manera particular se destaca el hecho que ambos gobiernos regionales ya cuentan con una Política de Género, la cual establece las pautas para avanzar en procesos de equidad.
2. Aunque hay avances institucionales – ya mencionados a lo largo de este trabajo -, a nivel de la Costa Caribe existen serias limitaciones en la aplicación de los diversos instrumentos legales que contribuyen a la aplicación de políticas públicas favorables a la equidad de género. Entre los problemas relevantes se mencionan los siguientes:
 - I. Los gobiernos regionales de RAAN y RAAS no han reorientado sus respectivos presupuestos en función de sus las políticas de género que han formulado ni disponen de planes específicos para la implementación de las mismas. Sus principales instancias – Comisiones y Secretarías – no cuentan con instrumentos para aplicar la política de género ni disponen de apoyo metodológico para ejecutarlas.
 - II. Aunque los gobiernos regionales disponen de una política de equidad de género, la misma no se articula con las instituciones de gobierno que tienen presencia regional y municipal (ministerios, entes autónomos) así como tampoco tiene vinculación con los planes y programas que se implementan a nivel de los Gobiernos Territoriales.
 - III. En ninguna de las municipalidades de la Costa Caribe (20 en total) se identificaron iniciativas que contribuyen a mejorar la equidad de género, tales como políticas municipales o estrategia de sensibilización, a como existen en otras localidades del país. Se encontraron políticas municipales destinadas a la niñez, la adolescencia y la juventud las que han sido aprobadas por los respectivos consejos municipales.
3. Aún persisten factores estructurales que propician la exclusión social de las mujeres y la falta de equidad de género en las relaciones sociales y económicas a lo interno de la Costa Caribe. Muy poco o casi nada se ha avanzado en mejorar la inserción de las mujeres en el mercado laboral formal, debido a la falta de empleos de calidad. Se mantiene e incrementa la participación de las mujeres en el sector informal (subempleo) así como en actividades agropecuarias, los que generan empleos precarios, mal remunerados y sin protección social. Esto redundo en bajos salarios para las mujeres, refuerza su rol doméstico y permite que tengan el menor acceso a recursos productivos (tierra, créditos, asistencia técnica).

A la vez, poco se ha avanzado en mejorar las condiciones de salud de las mujeres (morbilidad, mortalidad materna), a la reducción del embarazo adolescente, a reducir la tasa de fecundidad especialmente en mujeres indígenas, a mejorar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento así como los niveles educativos. Se mantienen prácticamente inalterables los porcentajes de pobreza y pobreza extrema de la población, los cuales son superiores al resto del país.



4. Hay que reconocer que en los últimos años – especialmente del 2012 en adelante – se ha impulsado una política desde el estado que promueve la inclusión de mujeres en cargos de elección popular y la gestión pública. Esta decisión ha tenido efectos positivos a nivel nacional y ha sido reconocida a nivel mundial; de hecho, se considera que Nicaragua es el país que más ha avanzado en reducir las disparidades de orden económico, educativo, sanitario y de participación política, según informes internacionales (Foro Económico Mundial, 2012).
5. En la Costa Caribe se observan avances en la participación de las mujeres en cargos de elección popular, especialmente en los Consejos Regionales Autónomos, donde ahora (período 2014 – 2017) ocupan el 46.6% de las concejalías. A nivel de alcaldesas, mantienen una modesta participación equivalente al 25% del total de alcaldías municipales en ambas regiones autónomas, para el período 2012 – 2016.
6. Si bien se reconoce esta mayor participación como un avance, se observan tres aspectos que limitan mejorar esta situación; el primero de ellos se relaciona con el actual modelo de representación de los grupos étnicos en los Consejos Regionales el cual favorece una mayoría de cargos para los mestizos, en detrimento del resto. Esto facilita que si bien hay un mayor número de mujeres en los Consejos Regionales, la mayoría son de origen mestizo, lo que refuerza el desequilibrio en relación a mujeres de otros grupos étnicos. El segundo se refiere a la necesidad de incrementar el actual número de diputados que han sido asignados a las dos regiones autónomas, ya que se trata de una cifra (3 en RAAN / 2 en RAAS) irreal, cuando se verifica que hay departamentos del país que disponen de una cantidad mayor, aún con menor población en edad de votar.

El tercer aspecto tiene que ver con la autonomía que disponen las mujeres que ocupan cargos de elección popular y de administración pública. La experiencia nacional y regional hasta ahora refleja que por lo general su actuación se basa en las directrices que provienen de estructuras superiores y muy pocas veces lo hacen por iniciativa propia o en base a propuestas provenientes de sectores de la sociedad civil. Habría que monitorear la actuación de las concejales mujeres en ambos gobiernos regionales y alcaldías municipales, para verificar este comportamiento u observar que están teniendo otra actuación.

IX. Recomendaciones

1. Demandar al Estado de Nicaragua para que cumpla con los compromisos adquiridos a través de los diversos instrumentos legales internacionales y nacionales, a fin de promover la equidad de género en las políticas públicas con mayor decisión y efectividad. De manera particular, demandar el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales que favorecen los derechos de los Pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en la Costa Caribe, a fin de reducir los factores estructurales que propician la exclusión, discriminación e inequidad.
2. En particular, se propone avanzar en la reforma al estatuto de Autonomía y la ley electoral, para lograr una mayor equidad en la representación política de los grupos étnicos en las instituciones autonómicas y de gobierno. A la vez, se requiere priorizar la implementación de planes y programas que mejoren la inclusión de las mujeres en el mercado laboral de la región, proveyéndolas de capacitación, asistencia técnica, crédito y acompañamiento para la comercialización. Urge mejorar los esfuerzos por reducir el embarazo adolescentes, la mortalidad materna e infantil así como mejorar el acceso a servicios de agua y saneamiento. Se debe exigir la efectiva implementación de la Ley de igualdad de Derechos y Oportunidades en materia de creación de empleo femenino digno y estable, como un mecanismo para frenar la migración externa.

De manera particular se debe exigir la asignación de recursos financieros y metodológicos para que las instituciones e instancias de los gobiernos regionales, implementen la política de equidad de género que ya disponen en coordinación y consenso con organizaciones sociales y de mujeres existentes en la Costa Caribe.

3. Los movimientos de mujeres de la Costa Caribe aprovechando la experiencia y capacidades creadas en materia de investigación, podrían impulsar la demanda ante el gobierno central para avanzar en los siguientes aspectos:
 - (i) Asignación de recursos para la creación y funcionamiento de un instituto de Estadísticas de las regiones autónomas (RAAN y RAAS), que se encargue de la construcción de las bases de datos de estadísticas vitales, con variables e indicadores socio demográficos y de salud acordes a las características de la población, que incorpore un capítulo especial sobre las mujeres con enfoque multiétnico, que produzcan información útil para la planificación adecuada del desarrollo de los pueblos de las regiones.
 - (ii) Mejorar los programas dirigidos a las mujeres víctimas de violencia de género especialmente en las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, debido a la lejanía que se encuentran y la nula presencia gubernamental.
4. Por su parte, las organizaciones de mujeres deben avanzar en la formulación de planes de capacitación y formación que incorporen las particularidades socio – culturales (enfoque intercultural) de las mujeres especialmente indígenas y afrodescendientes, a fin de ajustar los objetivos a la realidad regional, municipal y territorial.

